

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTO.

Que se ordenó instruir el presente sumario Rol N° 47.518 Joel Huaiquiñir Benavides, a fin de investigar la existencia del delito de secuestro calificado en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides, ocurrido a contar del día 27 de julio de 1974 y, la responsabilidad que en su comisión les habría correspondido como coautores a:

1.- César Manríquez Bravo, chileno, natural de Santiago, 85 años, casado, cédula de identidad N° 2.151.873-5, General de Brigada del Ejército de Chile en retiro, domiciliado actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile, con anotaciones penales de acuerdo a su extracto de filiación de foja 1323 y siguientes.

2.- Miguel Krassnoff Martchenko, chileno, natural de Austria, 70 años, casado, cédula de identidad N° 5.477.311-0, Brigadier de Ejército en retiro, domiciliado actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile, con anotaciones penales de acuerdo a su extracto de filiación de foja 1404 y siguientes.

3.- Orlando José Manzo Durán, chileno, natural de Santiago, 82 años, casado, cédula de identidad N° 3.244.925-5, Teniente Coronel de Gendarmería de Chile en retiro, domiciliado actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile, con anotaciones penales de acuerdo a su extracto de filiación de foja 1337 y siguientes.

4.- Basclay Humberto Zapata Reyes, chileno, natural de Chillán, 69 años, casado, cédula de identidad N° 5.337.668-1, Suboficial Mayor de Ejército en retiro, domiciliado actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Gendarmería de Chile, con anotaciones penales de acuerdo a su extracto de filiación de foja 1374 y siguientes.

Son parte en esta causa, además de los acusados:

1) Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su calidad de coadyuvante, representado por Catalina Lagos Tschorne.

2) Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de coadyuvante, representado por la Abogado Procurador Fiscal de Santiago doña Irma Soto Rodríguez.

3) María Haydee Collantes Urbina, dueña de casa, cónyuge de Joel Huaiquiñir Benavides; **Joel Antonio Huaiquiñir Collantes**, profesor de violín; y, **Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes**, actor, ambos hijos de la víctima Joel Huaiquiñir Benavides y todos domiciliados en Laguna Blanca N° 1785, Población Nueva Palena, comuna de Peñalolén, como querellantes y demandantes civiles.

4) Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de demandado civil.

Dio origen a este sumario la resolución de foja 8687 del cuaderno principal de la causa Rol N° 47.518, Comité Central del Partido Socialista, en la cual se ordenó formar cuaderno separado para investigar el delito de secuestro de Joel Huaiquiñir Benavides, según da cuenta certificación de fecha 03 de marzo de 2015 que rola a foja 1.

Durante el desarrollo del sumario se practicaron las diligencias que rolan en la causa tendientes a establecer la efectividad de los hechos, y la participación que les habría correspondido en los mismos a los acusados. Como consecuencia de lo anterior, por resolución de 14 de mayo de 2015, escrita de foja 596 a 598, se somete a proceso a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes, como coautores del delito de secuestro calificado, cometido en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides a contar del día 27 de julio de 1974. Luego, mediante resolución de 11 de junio de 2015, escrita de foja 827 a 830, se somete a proceso a César Manríquez Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito y a Orlando José Manzo Durán por el delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides cometido a contar del 27 de julio de 1974.

Por resolución de 27 de octubre de 2015, escrita de foja 984 a 988 y, después de practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del delito y la participación en el mismo de los procesados, se dictó acusación judicial en contra de César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Orlando José Manzo Durán y Basclay Humberto Zapata Reyes, como coautores de la misma infracción penal referida en los autos de procesamiento.

El Programa Continuación Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior, luego Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Derechos Humanos, a través de la abogada Loreto Meza van den Daele a

foja 993, se adhiere a la acusación de oficio en los mismos términos de ella.

La Abogado Procurador Fiscal de Santiago doña Irma Soto Rodríguez, en representación del Consejo de Defensa del Estado, mediante presentación de foja 996, se adhiere a la acusación judicial en los mismos términos en que fue planteada.

Los abogados Boris Paredes Bustos y Magdalena Garcés Fuentes por los querellantes María Haydee Collantes Urbina, Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, a foja 1000 se adhieren a la acusación judicial en similares términos en los que fue planteada, solicitando la aplicación de circunstancias agravantes y demandando civilmente al Fisco de Chile, por el daño moral sufrido reclamando el pago de la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de las demandantes.

La defensa de Basclay Humberto Zapata Reyes de foja 1037 a 1040, alega como cuestiones de fondo la falta de participación en los hechos imputados, toda vez que no existiría en el proceso antecedentes que permitan elaborar presunciones judiciales para dictar sentencia condenatoria, ya que no hay indicios reales y probados que sustenten su participación en la detención y posterior desaparición de la víctima. Invoca como atenuantes la media prescripción, su irreprochable conducta anterior y el haber actuado en cumplimiento de órdenes, solicitando además se le conceda alguno de los beneficios contemplados en la Ley N° 18.216.

La defensa de Orlando José Manzo Durán de foja 1058 a 1061, alega como cuestiones de fondo la exención de responsabilidad penal del artículo 159 del Código Penal, ya que fue destinado a la DINA para hacerse cargo de un recinto de detención y debió cumplir las órdenes de sus superiores, a quienes les debía obediencia disciplinaria. Alega la falta de participación en los hechos imputados, ya que no hay en el proceso ninguna consideración que señale cual fue su participación en el hecho, en atención a que fue destinado a la Dina y a Cuatro Álamos a partir del 28 de octubre 1974, además que no tuvo ninguna relación con la detención de la víctima de autos y su posterior desaparición. Invoca como atenuantes la media prescripción y su irreprochable conducta anterior, solicitando además se le conceda alguno de los beneficios contemplados en la Ley N° 18.216.

El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, por el escrito de foja 1063 y siguientes, contesta la demanda civil interpuesta en su contra, planteando la excepción de pago y excepción de prescripción extintiva; en cuanto al daño e indemnización reclamada entrega sus apreciaciones para su regulación y formula la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

La defensa de César Manríquez Bravo de foja 1153 a 1162 formula sus alegaciones y opone la amnistía y la prescripción de la acción penal como excepciones de previo y especial pronunciamiento; en subsidio, alega como cuestiones de fondo la amnistía y prescripción de la acción penal, luego dice que en la causa no hay ningún elemento o antecedente para que su representado pueda ser acusado, ya que no se cumpliría ninguno de los presupuestos para que exista prueba completa de su participación como autor y ni siquiera como cómplice o encubridor. Agrega que durante su desempeño en la Dirección Nacional de Inteligencia jamás cumplió funciones operativas, sino meramente administrativas y solicita se le conceda alguno de los beneficios contemplados en la Ley N° 18.216.

La defensa del acusado Miguel Krassnoff Martchenko de fojas 1198 a 1202, alega a su favor como cuestiones de fondo la amnistía y prescripción de la acción penal, luego invoca la falta de participación de su representado y correcta calificación del delito; pide como atenuantes la media prescripción o prescripción gradual, el cumplimiento de órdenes e irreprochable conducta anterior. Solicita se le concedan los beneficios de la Ley N° 18.216, en especial la remisión condicional o libertad vigilada.

En su oportunidad se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en la causa, certificándose el fin del término probatorio a foja 1292; luego se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, decretándose las medidas para mejor resolver que rolan en la causa, y cumplidas éstas, quedaron los autos en estado para dictar sentencia.

CONSIDERANDO.

En cuanto a la acción penal.

Primero: *Que, por resolución de foja 984 a 988, se acusó de oficio por el delito de secuestro calificado en la persona de Joel Huaiquiniir Benavides, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de su comisión. Acusación a la que se sumó la coadyuvante actual Programa de Derechos Humanos del Ministerio de*

Justicia y Derechos Humanos ex Programa Continuación Ley N° 19123 (foja 993), el coadyuvante Consejo de Defensa del Estado (foja 996) y los querellantes María Haydee Collantes Urbina, Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes (foja 1000) en lo tocante al ilícito, en los mismos términos en que ésta fue propuesta, pidiendo se condene a los acusados a las máximas penas establecidas en la ley.

Segundo: *Que, con el fin de acreditar la existencia de los hechos punibles materia de la acusación judicial y adhesión, se allegaron a los autos los siguientes antecedentes relevantes:*

1) Copias de declaraciones judiciales de foja 12 y 36 de Cristián Van Yurick Altamirano, *en las que señala que fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, razón por la cual fue detenido el 12 de julio de 1974 en la comuna de La Reina, no obstante el día anterior habían sido detenidos un grupo de militantes entre los que se encontraba su hermano Edwin, quienes practicaron dicha detención fueron efectivos de la Dina de un grupo especial denominado Halcón 1 y que estaba conformado por Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo a quien conocía y Basclay Zapata, los que estaban avocados a la desarticulación del MIR. En el cuartel de Londres 3° o Cuartel Yucatán vio detenidos a una gran cantidad personas, entre ellos, Joel Huaiquiñir. Recuerda haber visto entre la venda que le cubría los ojos a los agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata, Osvaldo Romo y Fernando Lauriani. Su detención se extendió hasta el día 06 de diciembre de 1976, estando primeramente en el recinto de Londres 38 hasta fines del mes de agosto en que fue trasladado a la pieza 13 del recinto Cuatro Álamos donde permaneció recluido hasta comienzos del mes de septiembre, ocasión en que es llevado al recinto de José Domingo Cañas, luego pasó por Villa Grimaldi, Ritoque, Puchuncaví. En diciembre de 1975 nuevamente fue trasladado a Villa Grimaldi y posteriormente a Tres Álamos. Respecto a la salida de Londres 38 se debió a que llegó una comisión de la OEA a tratar de ingresar para constatar si existían detenidos en su interior. En cuanto a Joel Huaiquiñir señala que lo vio por primera vez en Londres 38 y después en Cuatro Álamos, donde estuvieron en el mismo camarote, lo habrían llevado al norte como Antofagasta o La Serena, contó que andaba gente relacionada con él, de la estructura del Partido Socialista, que era buscada y lo más serio era un depósito de armas en el norte, por eso lo llevaron y lo*

trajeron junto a otro detenido que al parecer era del norte y la última vez que lo vio fue a fines de agosto o septiembre de 1974 en Cuatro Álamos.

En foja 36 relata los hechos ya descritos relacionados con su detención, en la cual participaron Miguel Krassnoff al que le decían “Capitán Miguel” con quien tuvo varios encuentros durante su cautiverio, además de Osvaldo Romo y otro al que llamaban “Troglo”. Estuvo prisionero en Londres 38 hasta fines de agosto de 1974, en el que llegó a Chile una comisión de la ONU y pidió revisar los cuarteles de la DINA. Recuerda que en Londres 38 estuvo con una gran cantidad de detenidos, entre los que se encontraba Joel Huaiquiñir. Cuando fue trasladado a Cuatro Álamos iba junto a Huaiquiñir en la misma camioneta y los pusieron en una habitación que era la “pieza 13”, en donde estaban además Teobaldo Tello Garrido, dos viejitos, Stalin Arturo Aguilera Peñalosa, Manuel Cortes Lara y un profesor de nombre Arturo Barría. Por la “pieza 13” pasaron otros detenidos, algunos de los cuales luego figuraron en la publicación que contenía 119 nombres de chilenos que habrían muerto en el extranjero. Estando en Cuatro Álamos fue sacado en algunas ocasiones y trasladado a José Domingo Cañas donde fue interrogado por Miguel Krassnoff y el “Ronco”. Permaneció en Cuatro Álamos hasta el 20 de octubre de 1974 en que pasó a Tres Álamos. Señala que siempre que fue sacado de Cuatro Álamos lo fue por el equipo de Miguel Krassnoff.

2) Querella criminal de foja 16, presentada el 19 de agosto de 2003 por María Haydee Collantes Urbina, cónyuge, y Joel Antonio y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, hijos de Joel Huaiquiñir Benavides, en la que señalan que era militante del Partido Socialista y Miembro del Comité Central, fue detenido el día 27 de julio de 1974, en una casa particular de unos amigos ubicada en Arturo Medina N° 5352, comuna de Ñuñoa, por personal vestido de civil que se identificaron como miembros del Servicio de inteligencia Militar (SIM), dicha detención se hizo pública los días 8 y 9 de agosto por los medios de comunicación, diciendo que la fecha de su detención era el 31 de julio; con fecha 9 de Agosto de 1974 tomaron conocimiento que “Joel Huaiquiñir fue detenido el 31 de julio del mismo año, relacionándolo con un hallazgo de armas en el mineral El Salvador” el cual fue descubierto por el personal del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en los faldeos del cerro Indio Muerto del Salvador, situación abiertamente contradictoria con la realidad, ya que, su detención

realmente fue el 27 de julio del año 1974, cuando se encontraba en la casa de Guillermo Naveas, por motivos de seguridad, ya que desde días antes estaban con seguimientos y anteriormente le señaló a su cónyuge que el mismo día en que fue detenido pretendía salir del país rumbo a Francia. Huaiquiñir era funcionario de Cobresal al igual que Ricardo García Posada, militante socialista, Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia, los que hasta el día de hoy están en calidad de desaparecidos. Agrega que cuatro días después de la detención de Joel Huaiquiñir, en la mañana del 31 de julio del mismo año, se presentaron civiles junto con él su hogar ubicado en Laguna Blanca N° 1785, para retirar artículos personales, momento en el que estaban en el domicilio la suegra de éste y sus dos hijos. Posteriormente, a los dos días siguientes volvieron a su hogar para retirar más ropa, sin volver a tener noticias de él.

3) Copia autorizada de declaración judicial de Luz Arce Sandoval de foja 48, por la que sostiene que fue detenida por agentes de la DINA el 17 de marzo de 1974, permaneciendo en Londres 38 donde producto de un disparo en un pie fue trasladada al Hospital Militar desde donde fue dejada en libertad el 10 de julio de ese año. No obstante, el 23 de Julio de 1974, fue nuevamente detenida por agentes de la DINA, siendo trasladada hasta el recinto de Villa Grimaldi, en donde fue salvajemente torturada. Debido a los apremios sicológicos de los que era víctima, y ante la posibilidad cierta de ser asesinada, a partir de la primera quincena del mes de Agosto de 1974, comenzó a colaborar con la DINA, entregando información sobre personas de su partido, pero conservando su condición de detenida, hasta que el 07 de mayo de 1975 pasó a desenvolverse como funcionaria de la DINA. En cuanto al trabajo operativo de la DINA, señala que la jefatura de la BIM estuvo en el cuartel de Londres 38 hasta el mes de noviembre de 1974, a cargo de un oficial de Ejército de apellido Manríquez, quien fue sucedido por Pedro Espinoza Bravo, hasta marzo de 1975 en que asumió el mando Marcelo Moren Brito. Agrega que el cuartel de calle Londres 38 fue reemplazado el 12 de septiembre de 1974 por el cuartel "Ollagüe" ubicado en calle José Domingo Cañas.

Respecto de Joel Huaiquiñir Benavides alias "Huaqui", afirma que en el mes de agosto de 1974 lo vio en Villa Grimaldi, pero no lo conocía desde antes. Luego de su detención la llevaron a Londres 38 y después a la Villa Grimaldi, donde llegó en muy malas condiciones y se le hizo sentar en el suelo, donde pudo escuchar como conversaba éste con un guardia y

mencionó que trabajaba en Cobre Salvador, tenía el pelo tieso, usaba zapatos de seguridad, sin poder identificar al guardia.

4) Copia informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de foja 56, en el que se indica que Joel Huaiquiñir Benavides fue miembro del Comité Central del Partido Socialista y fue detenido el 27 de julio de 1974, en el norte, fue conducido a Santiago y se le vio en diversos lugares de detención, entre ellos Londres 38 y Cuatro Álamos. Además, dice que un periódico de la capital se refirió públicamente a su detención, relacionándola a un supuesta existencia de armas en el norte, siendo reconocida la aprehensión por el Ministerio del Interior e informó al Tribunal que conocía de su Amparo que se encontraba “detenido en cumplimiento a lo que ordena el Decreto Exento N° 285”, para luego señalar mediante otro Decreto Exento, el N° 414 que “se encuentra en libertad”, sin embargo luego de su permanencia en Cuatro Álamos se perdió todo rastro de él.

5) Declaración jurada de Mario Enrique Aguilera Salazar de foja 58 y copias de declaraciones judiciales de fojas 68 y 100, en cuanto indica que fue detenido el 12 de agosto de 1974 por efectivos de la DINA y conducido a Londres 38, luego a los recinto de calle José Domingo Cañas, Cuatro Álamos y Tres Álamos, hasta que salió del país en junio de 1975. Señala que su detención se produjo en la vía pública por un grupo de tres civiles, tomando conocimiento que uno de los partícipes era apodado “Troglodita” y que en la cabina del vehículo en que se le trasladó se encontraba una mujer de nombre Luz Arce, a quien conocía con anterioridad y junto a ella Osvaldo Romo. Fue conducido al recinto de calle Londres 38, donde permaneció entre el 12 y 19 de agosto de 1974, pudiendo advertir que a los detenidos se les asignaba un número, correspondiéndole a él el 45, reconociendo a varios de ellos. El 19 de agosto de 1974 fue llevado al recinto de calle José Domingo Cañas, donde volvió a encontrarse con Luz Arce, permaneciendo detenida hasta el día 24 de ese mes, en que fue trasladado a Cuatro Álamos, sección incomunicados, donde permaneció hasta el 24 de septiembre de 1974. En Cuatro Álamos fue asignado a una habitación en la que había entre 15 y 20 personas, donde vio detenido, entre otros, a Joel Huaiquiñir Benavides, conocido como “Huaico”, con quien había estado también en Londres 38, al que conocía desde antes, porque era del Secretariado del Partido Socialista en Ñuñoa e incluso en una ocasión había ido a su domicilio. La detención

de Huaiquiñir la supo por el diario El Mercurio el domingo anterior a su propia detención, agregando que a éste lo sacaron dos o tres veces desde Cuatro Álamos y temía que lo llevaran al norte del país porque había trabajado en el mineral El Salvador; recuerda que tenía aproximadamente 30 años, pelo tieso, bigotes, moreno, 1,65 mt. de estatura, macizo y supo que era casado. Permaneció detenido junto a Huaiquiñir hasta que un día le dijeron que tomara todas sus cosas, lo sacaron del lugar, preguntándole a un guardia por el destino de Joel, quien le dijo que lo habían llevado al sur, sin volver a saber de él.

En foja 68 señala que reconoció entre quienes lo detuvieron a El Troglo de nombre Basclay Zapata, quien además junto a Osvaldo Romo participaron en sus torturas. Añade que en Londres 38 ubicó a Joel Huaiquiñir Benavides, a quien se le conocía como “El Huaico” y posteriormente se encontró con él en el centro de detención Cuatro Álamos.

A foja 100 agrega que cuando fue detenido fue llevado al cuartel de la DINA de Londres 38, donde se contactó con otros detenidos, entre otros, con Joel Huaiquiñir, al que conocía desde las Juventudes Socialistas.

6) Copias de declaraciones de León Gómez Aráneda de foja 77 y 290, *en las que asevera que era militante del Partido Socialista, por lo que fue detenido el 13 de septiembre de 1973, luego fue liberado y vuelto a detener en mayo de 1974, en su domicilio por sujetos que señalaron ser de Investigaciones, trasladándolo al cuartel de la policía, siendo liberado nuevamente. El día 15 de julio de 1974, mientras estaba en su domicilio, en horas de la tarde llegó Luz Arce, quien le señaló que quería conectarse con gente del partido, ella estaba acompañada por un sujeto de quien supo posteriormente apodaban “cara de santo”; luego de conversar y preguntarle ella por gente del partido, le pidió que la encaminara a su domicilio y cuando ya habían caminado unos cincuenta metros, el “cara de santo” lo encañona y le señala que estaba detenido, luego de lo cual se apersonó Osvaldo Romo, lo subieron a una camioneta y lo llevaron al recinto de Londres 38, el cual reconoció porque había sido sede del Partido Comunista y luego de ser ingresado se le asignó el número 88 con el cual sería identificado. Fue interrogado mediante aplicación de torturas por quienes identificó como Osvaldo Romo, Basclay Zapata, el “cara de santo” y puede ser que Krassnoff hubiese presenciado los interrogatorios y confeccionado las minutas de interrogatorio, ya que eran muy elaboradas. Luego de unos diez días de cautiverio, fue subido a un camión junto con*

otros detenidos y trasladado a otro recinto denominado Cuatro Álamos, donde fue dejado en una pieza con otros detenidos, entre los que se encontraba Joel Huaiquiñir, quien le pasó un vestón ya que andaba sólo con camisa.

7) Copia autorizada de orden de investigar de foja 91, en la que el Departamento V de la Policía de Investigaciones da cuenta que Mario Aguilera Salazar fue detenido el día 12 de agosto de 1974, en la vía pública por agentes de la DINA, entre los cuales se encontraba Osvaldo Romo Mena, Basclay Zapata Reyes y un terceto que no logró identificar, quienes además se encontraban acompañados por Luz Arce Sandoval, quien lo sindicó (porroteo) como a la persona que había que detener, para posteriormente trasladarlo a Londres 38. Agrega que en ese lugar logra identificar a uno de los detenidos, como Joel Huaiquiñir Bernavides. Consecuente con lo anterior, fueron trasladados a Cuatro Álamos, donde nuevamente estuvo con Joel Huaiquiñir, a quien sacaban constantemente a interrogatorios y en algunas oportunidades no llegaba en las noches.

8) Copia de declaración judicial María Elena Osses Leyton de foja 105, en cuanto señala que el 29 de julio de 1974, llegó un grupo de hombres a su casa en horas de la madrugada, la sacaron e hicieron subir a un vehículo, donde escuchó que irían a buscar a Miguel Morales y en otro de esos vehículos iba Luz Arce que fue quien entregó su domicilio. Fue llevada a un lugar que desconoce y luego en horas de la mañana la llevaron al recinto de calle Londres, siendo ingresada al segundo piso. A los dos días la cambiaron de habitación y comenzaron los interrogatorios mediante diversos tipos de torturas. Fue sacada del lugar y llevada a otros recintos que no pudo identificar, hasta que llegó a un lugar donde escuchaba las campanas de la Iglesia de San Francisco, lugar en el cual había más detenidos y podían conversar entre sí, recinto en el que recuerda a Joel Huaiquiñir, quien fue brutalmente torturado. Permaneció en este lugar unos 8 o 10 días, luego de lo cual fue trasladada a Cuatro Álamos, donde fue ingresada a un pieza en la que había más mujeres, permaneciendo algunos días en el lugar, hasta que fue sacada en horas de la noche y dejada en libertad en la vía pública.

9) Copia autorizada de declaración judicial de Aníbal Ricardo Villaseñor Muñoz de foja 282, quien afirma que el día 12 de agosto de 1974, en circunstancias que estaba en su oficina de CORFO, ubicada en el edificio Tupahue, en calle San Antonio, dos o tres sujetos acompañados por

Muriel Dockendorff, quien le dijo "te cagué", fue detenido y trasladado en una camioneta. Al subir le vendaron la vista y después de dar varias vueltas llegaron a un recinto, en el cual por el murmullo, se pudo percatar que había más personas, enterándose al día siguiente que estaba en el recinto de Londres. Después fue trasladado junto a un grupo de 15 personas, en un camión a un lugar que con posterioridad supo se trataba de Cuatro Álamos, lugar en el que le sacaron la venda, y fue dejado en un sector con alrededor de 15 personas, en ese lugar pudo conversar con Alejandro Parada, un joven de apellido Duque. También recuerda a Mario Aguilera y estuvo también con un dirigente del Partido Socialista de apellido mapuche, pero no recuerda con exactitud cómo se llamaba. Mientras estuvo en Cuatro Álamos pudo ver a algunos agentes de la DINA como Osvaldo Romo, Basclay Zapata "El Troglo", a un sujeto a quien le decían "el Jefe Suave o el Jefe Bueno" y un sujeto que siempre andaba con Romo y el Troglo que tenía sus ojos como inyectados con sangre, de estatura mediana, pelo negro y rasgos bien marcados.

10) **Copia de declaración judicial de Manuel Anselmo Carpintero Durán de foja 303**, quien señala que los primeros días del mes de junio de 1974, fue detenido luego trasladado al subterráneo de la Plaza de la Constitución. Permaneció en ese lugar cerca de un mes aproximadamente y luego a Londres 38. En ese recinto pudo hablar con varios detenidos, algunos de los cuales hoy se encuentran desaparecidos como Álvaro Modesto Vallejos Villagrán "EL Loro Matías", el "Conejo Grez", entre otros. Los detenidos permanecían en una sala donde había una chimenea y se les asignaba un número con el cual los identificaban. A fines de julio o principios de agosto lo trasladan a Cuatro Álamos junto a Nuñez, quien fue el primer Secretario General de la CUT, Barrera, quien trabajaba en el Ministerio de Agricultura y otro de apellido Cabello. Cuando llegó a Cuatro Álamos fue dejado en una celda chica, que se ubicaba pasado los baños. En una oportunidad en Cuatro Álamos lo llevaron a la pieza grande a ver un partido de fútbol, ahí pudo ver a Joel Huaiquinir, quien en una oportunidad cuando salió a hacer aseo le contó que había sido torturado.

En foja 540 declara que en junio de 1974, mientras pertenecía al Comité Central de la Juventud Socialista, fue detenido en calle Huérfanos, por un oficial de Carabineros, siendo llevado al subterráneo de la Plaza de la Constitución. El SICAR lo entregó a la DINA en el cuartel de Londres 38, donde fue interrogado por Marcelo Moren personalmente. En Londres 38

estuvo detenido más de un mes, es decir, salió de ahí en julio o agosto de 1974, con destino a Cuatro Álamos, donde había más gente detenida y en una celda pequeña estaba junto a unas diez personas. Ahí le sacaron la venda y pudo ver a Norambuena y Arenas, a quienes conocía de antes y eran miembros de la Juventud del Partido Socialista. En dos oportunidades vio a Joel Huaiquiñir y en una tercera oportunidad lo escuchó. A Huaiquiñir lo conocía de antes, ambos pertenecían a la Juventud Socialista y se vieron durante los años setenta en actividades partidarias, ambos tenían el mismo cargo de la Juventud Socialista, pero Joel en el norte, al parecer en Copiapó, por lo que regularmente conversaban. La primera vez que vio detenido a Joel Huaiquiñir Benavides fue en Cuatro Álamos. Él estaba haciendo aseo en el patio del recinto, se le acercó y contó que había sido torturado y que le habían metido un alambre por el pene y que se lo habían roto en cuatro partes. A pesar de todo se manifestó esperanzado en salir libre y recuerda que le daba ánimos diciéndole “vamos a salir de esta”, conversación que duró muy poco, ya que un guardia ordenó terminarla y seguir trabajando. La segunda vez que lo vio fue cuando se jugó la final del Campeonato Nacional de Fútbol, que fue como unos cuatro días después del primer encuentro que tuvo con él. Cuando entró a la sala donde estaba el televisor, de inmediato vio a Joel Huaiquiñir, quien se le acercó a conversar, sin recordar bien el contenido de la conversación pero con seguridad hablaron de sus familias. No volvió a ver a Joel, pero sí lo escuchó hablar. Unos pocos días después, tiene que haber sido dentro de la misma semana del partido de fútbol, llegó el guatón Romo acompañado del Troglo, abrió su celda y gritó si estaba ahí Joel Huaiquiñir, luego siguió su camino hasta la pieza grande desde donde sacó a Joel. Escuchó cuando el guatón Romo le dijo que lo iban a “llevar a Temuco” y Joel les dijo que eso era mentira ya que él no tenía relación alguna con Temuco, siendo esa la última vez que supo de él. El motivo por el cual asegura que Romo y el Troglo fueron los que lo sacaron, fue porque ya los identificaba de antes, los conocía a ambos desde su paso por Londres 38.

11) Copia de declaración judicial de Domingo Ignacio Cadin Cruces, de foja 311, en cuanto señala que alrededor de las 24:00 horas del día 29 de junio de 1974, llegaron hasta su domicilio alrededor de cinco a seis agentes los que luego de ingresar le ordenaron que se vistiera rápido, reconociendo que esta orden se la dio un dirigente de la USOPO, que conocía como Osvaldo Romo. Le vendaron los ojos y lo introdujeron

en una camioneta, siendo conducido al cuartel de Londres N° 38. Luego fue trasladado a Cuatro Álamos un día en que llegaron unos agentes y nombraron entre ocho o diez personas entre ellos a él, los sacaron de Londres 38 y los hicieron subir a unas camionetas, donde quedaron tendidos, siendo llevados a Tres Álamos fueron entregados a unos Carabineros que estaban a cargo del cuartel. Al ingresar a la guardia les pidieron los nombres completos y la dirección sus domicilios, para luego ser ingresados al pabellón de incomunicados de Cuatro Álamos. Estando en este recinto llegó Joel Huaquiñir Benavides, a quien no conocía, pero sostuvo conversaciones mientras estuvieron privados de libertad en Cuatro Álamos. El 6 o 7 de septiembre de 1974, los hicieron formar a un grupo de diez personas y los trasladaron a Tres Álamos y quedaron en libre plática y ese hecho significaba que eran reconocidos como presos políticos y los Carabineros se encargaron de avisar a sus familias de que podían recibir visitas.

12) Copia del parte policial de foja 363, por el cual la Policía de Investigaciones remite organigrama de la DINA y sus diversos cuarteles, en el que se señala que la Brigada de Inteligencia Metropolitana, dependiente del Departamento Interior, de la Dirección de Operaciones de DINA, estuvo bajo el mando en primer lugar de César Manríquez Bravo, luego de Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito y Carlos López Tapia; la Brigada Caupolicán estaba integrada, entre otros, por los oficiales Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko; además, la agrupación Halcón estaba integrada por Basclay Zapata Reyes y otros agentes. En cuanto al cuartel de Londres 38 o Yucatán, los jefes de dicho recinto fueron Ciro Ernesto Torré Sáez, Miguel Krassnoff Martchenko y otros. En cuanto al recinto de detención Cuatro Álamos, el jefe del recinto fue Orlando José Manzo Durán.

13) Oficio de foja 486 por el cual el Partido Socialista remite los antecedentes que rolan de foja 487 a 496, relacionados con el militante Joel Huaquiñir Benavides, quien fue detenido el 27 de julio de 1974, en el domicilio de su amigo Guillermo Naveas por agentes de la DINA que dijeron pertenecer al Servicio de Inteligencia Militar y que el 9 de agosto de 1974 en varios medios de prensa se publicó una noticia de hallazgo de un arsenal en el cerro Indio Muerto encontrado por el servicio de inteligencia militar y que se encontraba en poder de Joel Huaquiñir, se afirmó que él había sido encargado por la policía acusado de ocultamiento de armas y

robo de material explosivo, que habría confesado la existencia de las armas, las que serían usadas para "volar cuarteles, comisarías e instalaciones militares". Se estableció que luego de ser detenido en la casa de su amigo, Joel fue conducido al recinto secreto de la DINA ubicado en la calle Londres 38, donde lo vieron varios prisioneros que después quedaron en libertad, entre ellos, Erika Hennings Cristián Van Yurick y Mario Aguilera. Todos ellos, junto a Huaiquiñir fueron trasladados el 19 de agosto al Campamento Cuatro Álamos de la DINA, en las cercanías de la avenida Departamental. Testigos de su detención coinciden en señalar que Huaiquiñir fue sacado de Cuatro Álamos y llevado al norte del país, por el hallazgo de armas y según Aguilera, Huaiquiñir temía que esto se vinculara con su anterior trabajo en El Salvador.

14) Declaración judicial de Andrés Segundo Rivera Neveu de foja 536, quien señala fue detenido el 30 de julio de 1974 por un grupo de sujetos vestidos de civil, para luego subirlo a un vehículo y trasladarlo a la calle mirador en busca de armas y luego a un sitio eriazo ubicado en un sector de la comuna de Maipú. Posteriormente, fue llevado hasta un recinto ubicado en la calle Londres, donde al llegar fue registrado, interrogado, propinándole golpes y aplicándole corriente eléctrica. Agrega que en Londres 38 se encontraban también detenidos Alfonso Chanfreau y su esposa Erika, además de Cristian Van Yurick, Mario Mallol y Joel Huaiquiñir. Luego a fines de agosto de 1974 fue trasladado a Cuatro Álamos, donde permaneció hasta el 1° de noviembre de 1974.

En foja 693 declara que en el cuartel de Londres 38 fue dejado en una especie de sala común donde había más personas detenidas, había hombres y mujeres. En ese recinto fue sometido a todo tipo de interrogatorios acompañado de torturas, los que se dirigían a saber acerca de armas y si conocía más gente dentro de su partido. Los interrogatorios los realizaban en el segundo piso del recinto, nunca supo quiénes eran los que realizaban esas sesiones de interrogatorios y torturas, pero no siempre fueron los mismos. Durante toda su permanencia en el recinto de Londres 38 estuvo con la vista vendada, por lo que no pudo ver con claridad rostros de personas que también estuvieran allí detenidas.

Luego, **en foja 697** declara que en Londres 38 fue interrogado acerca del destino de algunas supuestas armas y de otros compañeros del Partido Socialista, todo ello con aplicación de golpes y de corriente, ya que lo tenían desnudo en la parrilla, permaneciendo siempre con los ojos

vendados, lo cual no le impidió tomar contacto con otros detenidos. Después de su primera sesión de torturas, lo sacaron del lugar, dejándolo tirado en una colchoneta entre los otros detenidos y la persona que estaba a su lado era Joel Huaiquiñir, cuyo nombre político era "Huaico" y al otro lado estaba Mario Mayol Penjeam. Joel Huaiquiñir le habló y se identificó, le dijo que era "el Huaico", no sabía quién era, pero le dio consejos, entre ellos, le dijo que mantuviera siempre la primera declaración, es decir aprender bien lo que uno dijo por primera vez a los torturadores, lo que le sirvió cuando cambiaron de equipo de interrogadores. Los agentes en Londres 38 los obligaban a acostarse uno tras otro y recuerda que a Mario Mayol le molestaba el cabello de Joel. Siempre estuvo vendado y nunca pude ver la cara de Huaico, quien le dijo que "todo pasaba", es decir, que todo tenía su fin, refiriéndose a la tortura y al interrogatorio. También le dijo Joel que los agentes de la DINA lo llevaron al norte y que ahí encontraron armas, y que estaban eufóricos por el hallazgo, pero Huaiquiñir le dijo que sólo era un barretín. No tiene noción de cuánto tiempo estuvo con el Huaico, nunca más lo escuchó y permaneció en Londres 38 desde el 30 de julio de 1974 hasta finales de julio o primeros días de agosto de 1974, fecha en que fui trasladado a Cuatro Álamos, sin ver al Huaico en este cuartel.

15) Fotografías de fojas 544 y 545, correspondientes a la víctima de autos Joel Huaiquiñir Benavides, obtenidas de la página web www.memoriaviva.cl, donde se aprecia sus rasgos físicos a la época inmediatamente anterior a su detención, sobre las que ha sido reconocido por algunos declarantes.

16) Dichos de Risiere del Prado Altez España de fojas 227, en cuanto dice que en junio de 1974 fue destinado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), junto a unos 30 o 40 funcionarios de Investigaciones, algunos de ellos los conocía, a otros sólo los ubicaba de vista. Luego de presentarse en un cuartel que era una casona en Vicuña Mackenna, le señalaron que su destinación era el Cuartel de la calle Londres N° 28 (sic), Santiago, junto con el Detective Manuel Rivas y Hugo Hernández, siendo recibidos por Krassnoff, el que supo era Oficial de Ejército, pero nunca lo vio uniformado. Recuerda que en ese recinto todos vestían ropa de civil. Indica que Krassnoff, estaba a cargo de dicho cuartel, y les dio la orden de desempeñarse como Oficiales Administrativos, siendo su función principal transcribir y ordenar por escrito las declaraciones que

prestaban los detenidos. Nunca tuvo participación operativa durante el tiempo que estuvo en el cuartel de la calle Londres y que luego de ese recinto, fue destinado a la unidad de Los Plátanos, también conocida como “La Venda Sexy”, donde cumplió las mismas funciones.

En foja 230 agrega que respecto del cuartel Londres 38, llegó en junio de 1974, siendo sus funciones las de transcribir las declaraciones de los detenidos que habían prestado ante los grupos operativos y de inteligencia de cada agrupación, declaración que se escribía a máquina. En cuanto al cuartel Cuatro Álamos, señala que nunca estuvo ahí, pero supo que existía. Respecto de Joel Huaiquiñir Benavides, dice que no le suena ese nombre, ni tampoco el apodo de Huaico y que en el mes de julio de 1974, prestaba servicios en Londres 38, desde donde fue trasladado al cuartel de Irán con Los Plátanos.

17) Dichos de Samuel Enrique Fuenzalida Devia de foja 689, en cuanto señala que fue destinado a la DINA en octubre o noviembre de 1973, organismo al que llegó engañado a través de un documento que le hicieron firmar en la comandancia del Regimiento de Calama. Prestó funciones en la DINA desde comienzos de noviembre de 1973 cuando llegó a Rocas de Santo Domingo, y hasta fines de marzo de 1975, fecha en que se retiró del Ejército, día en que les hicieron una despedida en el cuartel general de calle Belgrado. Estuvo en la Brigada de Inteligencia Metropolitana, prestando funciones de guardia y de aseo y ornato del cuartel de Villa Grimaldi, durante el año 1974 el jefe de la BIM era César Manríquez, desde septiembre de 1974 hasta enero o febrero de 1975, Pedro Espinoza asume el mando de la BIM, y con ello el mando de Villa Grimaldi, siendo relevado en enero o febrero de 1975 por el Coronel Moren Brito. Además, formó parte de un grupo operativo que operaba en Londres 38, era Caupolicán, siendo su primer jefe Pinto Larrizaga y después Miguel Krassnoff Martchenko. Los grupos operativos de la Brigada Caupolicán, eran Halcón 1, Halcón 2, Águila, Tucán y Vampiro. Miguel Krassnoff Martchenko mandaba Halcón 1 y Halcón 2 y en esos grupos estaban Tulio Pereira, Basclay Zapata, apodado El Troglo, a quien lo conoció desde un principio, el guatón Romo y otros funcionarios cuyos nombres no recuerda.

18) declaración de Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, de foja 727, querellante e hijo de la víctima de autos, quien señala que Joel Huaiquiñir Benavides, era instructor de seguridad industrial, labor que

cumplió en Cobresal, de militancia socialista, miembro del Comité Central del Partido, quien fue detenido el 27 de julio de 1974 por el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, que pasó a llamarse DINA. Dice que su padre fue visto en los recintos de detención Londres 38, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. Fue detenido en calle Arturo Medina, en casa de Guillermo Naveas, en la comuna de Ñuñoa. Agrega que ocho días después de la detención, llegó a su domicilio un automóvil particular muy grande con tres sujetos en el interior, que decían ser del Servicio de Inteligencia Militar, quienes exigieron entregarle la mejor ropa que tuviera su padre, la que se llevaron y además frazadas, lo cual vio, y a su padre lo tenían en el suelo del asiento trasero, amarrado con alambres, cuando terminaron, uno o dos agentes los tomaron a él y a su hermano Joel, de 5 años, al auto donde estaba su papá y les dijeron “despídanse del papito”, recordando que pudo darle un beso, su cara estaba con barba, lo que le llamó la atención ya que él se preocupaba mucho del bigote.

19) Antecedentes remitidos por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad a foja 795, consistente en una declaración jurada prestada por Jorge Augusto Hernández Soto, quien señala que en el año 1974 y debido a su ficha policial fue contactado por Fernando Cruzat Aguirre, jefe de la Brigada Inteligencia Miraflores que pertenecía a la DINA, para pasar a desempeñarse como colaborador de dicho organismo, lo cual aceptó. A fines de junio o principios de julio de 1974, fue contactado por Pedro Zacunari, jefe de turno del Café Haití, quien le señaló que se debía detectar y detener a miembros del Partido Socialista que estaría utilizando dicho café para reunirse; y, entre las personas que se debía detener estaba Joel Huaiquimil (sic), también conocido como “Huaico”, quien había sido Secretario Regional del Partido Socialista y del cual le dijeron que trabajaba en el Mineral El Salvador en el tiempo de la U.P.. Agrega que respecto de Joel Huaiquimil (sic) luego de ser detenido fue interrogado durante dos días en el cuartel Dominó y después entregado al cuartel Londres, supo que había muerto en los interrogatorios, sin embargo después se enteró por la prensa que lo habían hecho aparecer como recién detenido, sindicándolo como que en una camioneta fiscal portaba armas y explosivos que tenía enterrados en el cerro Indio Muerto de la localidad de El Salvador.

20) Copia certificada de información de prensa de los diarios La Tercera de La Hora y El Mercurio, en sus ediciones de 9 de agosto de

1974, custodiadas a fojas 794, que dan cuenta de la detención de la víctima de autos. El diario “El Mercurio” en su página 19 tituló “Explosivos y Armas en Cerro Indio Muerto”, señalando en la noticia que el descubrimiento fue logrado luego de la detención del ex integrante del Comité Central del Partido Socialista, Joel Huaiquiñir Benavides, quien fue sorprendido transitando en una camioneta robada al mineral El Salvador. El diario “La Tercera” tituló en su página 17 “Hallan arsenal destinado a volar cuarteles y comisarías”, informando en la noticia que el material bélico de procedencia extranjera estaba en poder de Joel Huaiquiñir Benavides, vendedor ambulante, apodado “El Huaico”, ex militante socialista, quien estaba encargado por la policía por el delito de ocultamiento de armas y robo de explosivos del mineral El Salvador, quien fue detenido el 31 de julio, cuando fue sorprendido en Santiago conduciendo una camioneta de ese mineral.

21) Declaración de María Haydée Collantes Urbina de foja 838, cónyuge de Joel Huaiquiñir Benavides, quien señala que era militante de Partido Socialista, y miembro del Comité Central del partido, por lo que después del 11 de septiembre era buscado por los servicios de seguridad del gobierno militar. El 27 de julio de 1974, Joel fue detenido por personal que se identificó como del SIM, en la casa de su amigo Guillermo Naveas, en calle Arturo Medina de la comuna de Ñuñoa. Siempre estuvo clandestino, a veces pudo visitarlos en su domicilio, desconociendo si su casa estaba siendo vigilada de antes. Más o menos tres días después, los que lo detuvieron lo llevaron a su casa, se llevaron ropa de él y trajinaron la casa, su madre lo vio, estaba en un vehículo, amarrado y a los niños les hicieron despedirse de él. Poco tiempo después, en los diarios se dio la noticia del hallazgo de explosivo en El Salvador y se responsabilizaba a Joel Huaiquiñir de tenerlo, lo cual era obvio que era falso. Lo buscaron en todas las cárceles, incluso Cuatro Álamos. Interpuso una denuncia por secuestro pero no prosperó. Nunca más supo de él, sin tener la menor duda que los que lo secuestraron eran de la DINA, ya que fue visto detenido en Londres 38, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. En septiembre de 1974 acudió al SENDET, donde un oficial de ejército, a cargo de esa oficina, le dijo “felicitaciones, su esposo salió libre por falta de méritos en su contra, siendo el número del decreto 414, le dijeron que era secreto y no podían darme copia, creyendo ingenuamente que era cierto, pero una amiga del Partido Socialista le dijo que eso no era bueno, comprendió

después que cuando daban ese decreto, era porque la persona estaba muerta.

22) Dichos de Erika Cecilia Hennings Cepeda de foja 858, en cuanto señala que fue detenida por agentes de la DINA el día 31 de julio de 1974 en casa de sus padres y su marido Alfonso Chanfreau Oyarce había sido detenido el día anterior en su domicilio. El caso que su marido fue llevado al recinto de detención de la DINA ubicado en calle Londres 38, lugar al que también fue llevada luego de su detención. Identificó como los autores de ella a Miguel Ángel Concha Rodríguez, quien era el conductor de Miguel Krassnoff, que tenía un hermano gemelo de nombre Rodolfo y a otro sujeto que identifico como Gene Lagos. El caso es que estos sujetos le señalaron que procedían a su detención porque su marido que había sido detenido el día anterior no les había entregado la información que necesitaban, por lo que la llevaban para que su marido les diera información. Estando detenida en Londres 38 fue interrogada y sometida a interrogatorios mediante instrumentos de tortura, además de ser llevada a presenciar las torturas a las cuales era sometido su marido y además a él le hacían presenciar las torturas que recibía. Cuando llegó al centro de detención fue dejada en una sala en que había aproximadamente unos sesenta detenidos e incluso en algunas noches llegaron a ser sobre cien personas los detenidos que permanecieron ahí. En Londres 38 diariamente pasaban lista a los detenidos, a los que nombraban por sus nombres, después los identificaban con una letra y un número. Entre los detenidos con los que estuvo, recuerda muy bien a Joel Huaiquiñir, con quien pudo conversar, el que le comentó que había sido detenido y llevado a Londres 38 desde el norte del país, quien además llevaba muchos días en ese lugar, por lo que estaba al corriente de la gente que llegaba detenida y era sacada del lugar, además de cómo funcionaba el recinto. A Joel Huaiquiñir no lo ubicaba de antes, ya que era militante socialista, pero él junto a otro detenido de nombre Sergio Montecinos Alfaro eran una especie de protectores del resto de los detenidos más jóvenes y especialmente con ella, por lo que conversaron en varias oportunidades mientras permaneció detenida en Londres 38, recordando que cuando fue sacada del recinto, Joel Huaiquiñir continuaba allí. En Londres 38 pudo ubicar a los agentes de la DINA, entre los que estaban Marcelo Moren Brito, que al parecer era el jefe del recinto, además Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence, Gerardo

Godoy, Manuel Rivas, Basclay Zapata y otros, además de los guardias encargados de la custodia de detenidos.

23) Declaración de Guillermo Segundo Naveas Gramattico de foja 879, quien sostiene que conoció en el año 1970 a Joel Huaiquiñir Benavides, a quien apodaba “Huaico”, que era el jefe político de la sección Ñuñoa del Partido Socialista, en el cual era militante. Además de ser militantes en el Partido Socialista, se hicieron muy amigos. Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 pasaron a la clandestinidad, no obstante a Joel Huaiquiñir lo habían enviado a cumplir labores partidarias al mineral de El Salvador, por lo que el golpe lo sorprendió en ese lugar, sin tener noticias de él hasta aproximadamente dos meses después, en que llegó a su casa y le pidió si podía darle alojamiento, ya que, continuaba con labores del partido, por lo que por razones de seguridad se debía mover constantemente de domicilio. Joel Huaiquiñir alojaba en su casa en una habitación en el segundo piso al lado de su dormitorio. La mañana del 27 o 28 de julio de 1974, alrededor de las 07:00 horas, mientras estaba durmiendo en su casa junto a su mujer, Joel y sus cuatro hijos, sonó el teléfono y Joel recibió un llamado, para luego escuchar que golpean la puerta, por lo que su mujer bajó a abrir, encontrándose con un gran número de hombres armados, lo que le causó una gran impresión, subiendo inmediatamente las escaleras para avisarle lo que sucedía, luego de lo cual los hombres armados los hicieron vestirse y los tuvieron alrededor de una hora en el living, mientras interrogaban a Joel, para luego llevárselo detenido, logrando pasarle una frazada. Luego de eso, los sujetos se llevaron a “Huaico” y les señalaron que en caso de que con su cónyuge estuviesen involucrados en alguna situación regresarían a buscarlos. Joel Huaiquiñir siempre tuvo la prudencia de no comentar nada respecto a las labores que estaba realizando para el partido, por lo que tenía total desconocimiento de lo que hacía, además de que no lo involucró en sus labores. No volvió a tener noticias de su amigo hasta unos cuarenta años después de su detención, en que golpearon la puerta de su casa y al preguntar quién era, le dijeron “Joel Huaiquiñir”, ante lo cual se sorprendió mucho pensando que era su amigo, pero en definitiva era su hijo, quien concurrió para conversar sobre la desaparición de su padre.

24) Dichos de Miguel Ángel Rebolledo González de foja 897, en cuanto señala que que aproximadamente desde el año 1971 comenzó a

militar en el MIR, pasando a clandestinidad después del 11 de septiembre de 1973, pero continuando con sus actividades partidarias hasta el día de su detención el 09 de agosto de 1974. Fue detenido en circunstancias que se encontraba en casa de sus padres en la comuna de La Reina, en horas de la noche, alrededor de las 04:00 am, por un grupo de agentes de la DINA, quienes irrumpieron en el domicilio. Fue trasladado a un recinto que luego pudo identificar como Londres 38, ya que, tenía referencias previas de la existencia de ese lugar como recinto detención y además fue bajado del vehículo en que lo trasladaron en la calle, por lo que pudo reconocer los adoquines. Estando prisionero en Londres 38 fue interrogado con torturas, logrando identificar a quienes lo torturaron como Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, Basclay Zapata apodado "El Troglo" y al "Guatón Romo". Una vez concluidos los interrogatorios fue llevado a una sala grande donde se encontraban los detenidos del recinto, quienes ocupaban la totalidad del espacio. Cuando se ingresaba al cuartel, se le pegaba un número de detenido en la solapa, correspondiéndole el 79, por lo que estima que esa era la cantidad de prisioneros estaban en el lugar en ese momento. El día 13 de agosto de 1974, fueron sacados siete detenidos por los agentes de la DINA para supuestamente ser trasladados a otro recinto de detención. Mientras esperaba para ser traslado en un pasillo ubicado al lado de la sala donde se mantenía a los detenidos y debido a que había un completo silencio, se levantó la venda para mirar alrededor y un guardia que se encontraba vigilándolos, le dijo que debía volver a ponerse la venda, llamándole la atención de no ser golpeado por esta acción. Fue apartado del grupo por Gerardo Godoy y posteriormente se enteró que los detenidos que fueron sacados de Londres 38 fueron trasladados a la Colonia Dignidad donde fueron eliminados. Permaneció detenido en el recinto de Londres 38 hasta el 16 de agosto de 1974, siendo trasladado a Cuatro Álamos, donde permaneció detenido por unos pocos días en una pieza grande junto a muchos otros prisioneros. De Cuatro Álamos fue pasado a Tres Álamos, para luego ser trasladado al campamento de prisioneros de Ritoque, para luego ser devuelto a Tres Álamos y expulsado del país con destino a Rumania. Durante su estadía en Londres 38, señala que estuvo junto a muchas personas, las cuales informaban la presencia de otros detenidos en el lugar, por lo que tomó conocimiento que también permanecía como detenido Joel Huaiquiniir Benavides, a quien no lo conocía con anterioridad.

Hechos y delito.

Tercero: Que, los antecedentes probatorios consignados y descritos en el acápite anterior, consistentes en querrela criminal, declaraciones de testigos y documentos públicos y privados, por estar fundados en hechos reales y probados y que por su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia, reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, conforman un conjunto de presunciones judiciales, que permiten tener por demostrado en el proceso los siguientes hechos relevantes:

a) Que, un grupo de agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que dependían de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, BIM, se avocaron a investigar las actividades de personas que formaban parte del Partido Socialista y de aquellos que colaboraban con dicho organismo, procediendo a detener a integrantes y/o adherentes al citado movimiento, llevándolos a lugares secretos de detención que mantenía el organismo, donde eran interrogados bajo apremios físicos.

b) Que Joel Huaiquiñir Benavides en el año 1974 era militante del Partido Socialista de Chile y miembro del Comité Central de dicho conglomerado político, quien el día 27 de julio de 1974 fue detenido en el domicilio de Guillermo Naveas Gramattico, por agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo llevado al cuartel clandestino de detención ubicado en calle Londres 38, lugar donde fue torturado, siendo visto en dicho recinto por otras personas que también estaban en calidad de detenidas.

c) Que, el indicado Huaiquiñir Benavides era constantemente interrogado bajo torturas y trasladado a lugares fuera del recinto, entre otros a Villa Grimaldi, ya que durante el año 1973 se había desempeñado como dirigente sindical en el Mineral El Salvador. Regresó al cuartel de calle Londres 38, donde estuvo hasta la última semana del mes de agosto del año 1974, fecha en que es trasladado a Cuatro Álamos, que era utilizado como recinto de detención y tortura por agentes de dicha organización, donde también fue visto por otros detenidos y se le mantuvo privado de libertad hasta el mes de agosto de 1974, desconociéndose desde esa fecha su paradero.

Cuarto: Que, los hechos que se han tenido por establecido en el motivo anterior, configuran la hipótesis penal que contempla el artículo

141 incisos 1 y 3 del Código Penal, correspondiendo al delito de secuestro calificado, en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides, en su redacción vigente a la época de comisión de los hechos punibles, aplicable por expreso mandato de los artículos 19 N° 3 inciso 7 de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, toda vez que la detención de que fue objeto la víctima, debe ser calificada por el tiempo que se prolongó -más de 90 días-, lo que evidencia un acto determinado y resuelto en contra de su libertad, siendo retenido en contra de su voluntad, a partir del día 27 de julio de 1974, en centros clandestinos de detención utilizados por la DINA, prolongándose esta situación hasta el día de hoy, ignorándose su actual paradero.

Quinto: Que, además, el mencionado delito debe ser calificado como de Lesa Humanidad al tenor de lo dispuesto en el artículo sexto del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que en su letra c) considera como crímenes contra la humanidad **“el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”**.

De lo anterior, aparece que para ser considerado como tal debe tratarse, entre otros, de un acto que atente contra la persona humana, perteneciente a la población civil, que la persecución se efectúe por motivos de índole político, racial o religioso, constituya o no una vulneración de la legislación interna.

En este caso, se trata de la detención de una persona, respecto de la cual nunca más se supo -secuestro- hasta el día de hoy, cuya motivación ha sido de orden político, por la sola circunstancia de pertenecer a un conglomerado político respecto del cual se había decidido combatirlo drásticamente, por agentes del Estado en una organización -Dirección de Inteligencia Nacional- que tenía toda una estructura, en forma específica, para la persecución, ubicación y detención de los miembros del Partido Socialista y, en su caso, hacerlos desaparecer, pues eran tratados como enemigos del país.

En estos antecedentes se acreditó suficientemente que actuaron Agentes del Estado, con el objetivo preciso de detener a la víctima, la que

al momento de su detención desarrollaba actividades lícitas, sin orden previa y exclusivamente por motivos políticos, ejecutándose el hecho con ocasión de una política de represión y desaparición de una persona por su pensamiento, negándose la autoridad estatal a proporcionar alguna información sobre la detención y el destino de aquella, lo que resulta atentatorio contra la persona humana.

Participación.

Sexto: Que, como coautores de los delitos establecidos en el motivo cuarto, fueron acusados judicialmente Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes, Orlando José Manzo Durán y César Manríquez Bravo, pieza de cargos a la que se adhirió el entonces Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a foja 993; la parte coadyuvante Fisco de Chile a foja 996 y los querellantes María Collantes Urbina, Joel Huaiquiñir Collantes y Vladimir Huaiquiñir Collantes a foja 1000.

Con respecto a Miguel Krassnoff Martchenko, cabe señalar que en las indagatorias de foja 209 y 221, expresa que fue destinado a la DINA en el mes de mayo o junio de 1974 con el grado de Teniente, y sirvió en dicho organismo hasta fines de 1976 o comienzos de 1977. Señala que desarrolló labores de estudio y análisis de inteligencia del área subversiva, especialmente el estudio de los grupos terroristas de esa época, principalmente el MIR, agregando que nunca participó en la detención de personas, ni de interrogatorios, ni dio órdenes para torturar a nadie, pero puede que ocasionalmente haya entrevistado a detenidos; dice que dependía directamente del Director de la DINA y que se desempeñó como analista, desconociendo quienes pertenecieron a los grupos operativos, de los cuales nunca fue destinado como jefe ni integrante. En cuanto a los cuarteles de la DINA, señala que entiende que Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi eran lugares de tránsito de detenidos, los que por diversas razones estaban a la espera de su traslado definitivo a Cuatro Álamos. Respecto de Londres 38 agrega que estuvo en ese recinto y entrevistó a las personas detenidas, pudiendo ver a algunos con la vista vendada y a otros sin venda en los ojos, además que a Cuatro o Tres Álamos concurrió en una sola oportunidad a comprobar antecedentes con algunas personas. Dice que siempre que concurrió a entrevistar detenidos a los diferentes cuarteles, previamente se identificaba y que los detenidos eran indocumentados, ya

que tenían cédulas de identidad falsas y que normalmente cooperaban. Agrega que se desempeñaba en el cuartel general ubicado en calle Belgrado y que en Villa Grimaldi había una dependencia que se le asignaba para cumplir sus funciones.

En **foja 221** señala que no solamente a él en aquella época, le correspondió la misión de encarar al MIR, existiendo otros organismos y estructuras de seguridad que tenían también como misión neutralizar a esos violentistas. En cuanto a su conocimiento y concurrencia a determinados cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional, aclara que los únicos recintos que conoció fueron Londres 38, muy ocasionalmente; José Domingo Cañas con mayor frecuencia que la anterior y el cuartel Terranova, que mucho después supo que se trataba de la Villa Grimaldi. En cuanto a su actividad específica, reitera que era analista, contando para ello con un mínimo grupo de personas que le cooperaban en esa actividad e inserto en su responsabilidad de analista debía ejecutar, lo que se llama ciclo informativo antes de emitir el resultado de su análisis; dentro del ciclo informativo, una de las actividades más importantes era comprobar los antecedentes obtenidos del estudio los documentos de los subversivos en terreno y en esa fase de estar en terreno vivió varios enfrentamientos, actitud violentista con la cual respondían los terroristas desde el momento en que sospechaban que podrían ser detenidos o indagados, enfrentamientos armados que se realizaron en horas del día y ante múltiples testigos presenciales de los hechos, como por ejemplo vecinos, transeúntes y otros. Agrega que los antecedentes que detalló el general Contreras, máxima autoridad de seguridad nacional de la época, los expuso él personalmente, desconociendo de dónde o cómo los obtuvo, pero lo más importante en ese antecedente fue que el ex director de DINA asumió responsabilidades por el conocimiento de 592 personas desaparecidas e indicando qué pasó exactamente con ellas. Preguntado por Londres 38, dice que fue ocasionalmente a ese lugar, por cuanto en su calidad de jefe de la seguridad personal del Presidente de la Junta Militar de Gobierno de la época y de su familia, debía efectuar las coordinaciones para saber cómo y dónde debía llevar posibles detenidos o solicitar la cooperación de las personas que allí laboraban para la prevención de cualquier atentado a la seguridad de las personas mencionadas. Dice que estaba autorizado por el director de la DINA para el ingreso a ese cuartel, hasta que fue

relevado de ese cargo a partir del mes de agosto y asignado oficialmente a DINA con sus funciones antsubversivas (MIR), en el cuartel de José Domingo Cañas. Agrega que cuando iba a Londres 38 solicitaba factibilidad de consultar con algún detenido si tenía antecedentes relacionados con actos terroristas en contra de las personas de las cuales tenía la misión de custodiarlas. Dice que a Cuatro Álamos nunca fue por tener entendido que tanto ese recinto como Tres Álamos dependían del Ministerio del Interior de la época. En Villa Grimaldi, tenía un reducido grupo de personas de las Fuerzas Armadas y de orden (5 o 6), los que conformaban su grupo de trabajo, el que participaba fundamentalmente en la fase de comprobación de antecedentes en terreno y, posteriormente supo que su agrupación de trabajo era denominada Halcón, denominación que entiende la asignaba la superioridad, que era el superior de Villa Grimaldi, quienes fueron entre fines de 1974 e inicio de 1977 los siguientes comandantes de cuartel: Pedro Espinoza, Marcelo Moren y Carlos López. Agrega que nunca supo nada acerca de la presencia en el cuartel Terranova de la directiva del Partido Socialista de la época, porque no era parte del área específica que le correspondía. Preguntado por Joel Huaiquiniñir Benavides, apodado El Huaico, señala no tener ningún conocimiento de la existencia de dicha persona, especialmente si pertenecía al Partido Socialista, ya que no era en absoluto de su incumbencia y que dicho nombre apareció en listado del documento del general Contreras y dice que fue detenido por agentes del DINE (Ejército) el 27 de julio de 1974, teniendo como destino inicial un cuartel DINE y destino final enterrado en Cuesta Barriga, desenterrado en enero de 1979, por la CNI y lanzado al mar frente a Los Molles.

Séptimo: Que, no obstante que el indicado acusado Krassnoff Martchenko, no reconoce participación en el delito de secuestro calificado en la persona de Joel Huaiquiniñir Benavides, obran en su contra los siguientes antecedentes probatorios:

a) Sus propios dichos en indagatorias de foja 209 y 221, en cuanto por ellos reconoce que fue destinado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, entre mayo o junio del año 1974 en donde estuvo hasta fines de 1976 o principios de 1977, cumpliendo funciones como analista, en materias relacionadas con movimientos u organizaciones terroristas subversivas clandestinas existentes en la época, dependiendo directamente del director de DINA; que por sus funciones y por diversas acciones tales

como enfrentamientos o allanamientos en que aparecieron antecedentes relacionados con el MIR, concurrió a recintos que eran de tránsito de detenidos para tomar contacto inicial o preliminar con estos y para retirar la documentación o antecedentes incautados y efectuar los análisis correspondientes, lo que significaba, concurrir en algunas oportunidades a los recintos de Londres 38, de José Domingo Cañas y al recinto de Villa Grimaldi para materializar su actividad.

b) Copias de declaraciones judiciales de foja 12 y 36 de Cristián Van Yurick Altamirano, en las que señala que fue detenido el 12 de julio de 1974 en la comuna de La Reina y que quienes practicaron dicha detención fueron efectivos de la Dina de un grupo especial denominado Halcón 1 y que estaba conformado por Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo a quien conocía y Basclay Zapata, los que se encontraban avocados a la desarticulación del MIR. En el cuartel de Londres 38 o Cuartel Yucatán vio detenidos a una gran cantidad personas, entre los que se encontraba Joel Huaiquiñir. Recuerda haber visto entre la venda que le cubría los ojos a los agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata, Osvaldo Romo y Fernando Lauriani. En foja 36 relata los hechos relacionados con su detención, en la cual participaron Miguel Krassnoff al que le decían “Capitán Miguel” con quien tuvo varios encuentros durante su cautiverio, además de Osvaldo Romo y otro al que llamaban “Troglo” y que en algunas ocasiones fue sacado de dicho recinto por el equipo de Miguel Krassnoff.

c) Copias de declaraciones de León Gómez Araneda de foja 77 y 290, en las que asevera que era militante del Partido Socialista, por lo que el día 15 de julio de 1974, llegó a su domicilio Luz Arce, quien le señaló que quería conectarse con gente del partido, ella estaba acompañada por un sujeto apodado “cara de santo”, el que lo encañonó y lo detuvo, luego de lo cual se apersonó Osvaldo Romo, lo subieron a una camioneta y lo llevaron al recinto de Londres 38, donde fue puesto en una habitación grande en el primer piso, desde la cual fue sacado y subido al segundo, siendo interrogado mediante torturas por Osvaldo Romo, Basclay Zapata, el “cara de santo” y puede ser que Krassnoff hubiese presenciado los interrogatorios y confeccionado las minutas de interrogatorio, ya que eran muy elaboradas.

d) Copia del parte policial de foja 363, por el cual la Policía de Investigaciones remite organigrama de la DINA y sus diversos cuarteles, en el que se señala que la Brigada Caupolicán estaba integrada, entre otros, por los oficiales Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko; además, la agrupación Halcón estaba integrada por Basclay Zapata Reyes y otros agentes. En cuanto al cuartel de Londres 38 o Yucatán, los jefes de dicho recinto fueron Ciro Ernesto Torr   S  ez, Miguel Krassnoff Martchenko y otros.

e) Dichos de Risiere del Prado Altez Espa  a de fojas 227, en cuanto se  ala que en junio de 1974 fue destinado a la Direcci  n de Inteligencia Nacional (DINA), siendo destinado al cuartel de la calle Londres N   28 (sic), donde fue recibido por Krassnoff, que supo era Oficial de Ejercito, pero nunca lo vio uniformado. Recuerda que en ese recinto todos vest  an ropa de civil. Sostiene que Krassnoff, estaba a cargo de dicho cuartel, y le dio la orden de desempe  arse como Oficial Administrativo.

f) Dichos de Samuel Enrique Fuenzalida Devia de foja 689, en cuanto se  ala que fue destinado a la DINA aproximadamente en octubre o noviembre de 1973. Estuvo en la Brigada de Inteligencia Metropolitana prestando funciones de guardia y de aseo y ornato del cuartel de Villa Grimaldi, durante el a  o 1974 el jefe de la BIM era C  sar Manr  quez, desde septiembre de 1974 hasta enero o febrero de 1975, Pedro Espinoza asume el mando de la BIM, y con ello el mando de Villa Grimaldi. Adem  s se  ala que form   parte de un grupo operativo que operaba en Londres 38, era Caupolic  n, siendo su primer jefe Pinto Larrizaga y despu  s lo fue Miguel Krassnoff Martchenko. Los grupos operativos de la Brigada Caupolic  n, eran Halc  n 1, Halc  n 2,   guila, Tuc  n y Vampiro. Miguel Krassnoff Martchenko mandaba Halc  n 1 y Halc  n 2 y en esos grupos estaban Tulio Pereira, Basclay Zapata.

g) Dichos de Erika Cecilia Hennings Cepeda de foja 858, en cuanto se  ala que fue detenida por agentes de la DINA el 31 de julio de 1974 en casa de sus padres y su marido Alfonso Chanfreau Oyarce hab  a sido detenido el d  a anterior en su domicilio. Su marido fue llevado al recinto de detenci  n de la DINA ubicado en calle Londres 38, lugar al que tambi  n fue llevada luego de su detenci  n. En Londres 38 pudo ubicar a los agentes de la DINA, entre los que estaban Marcelo Moren Brito, que al parecer era el jefe del recinto, adem  s Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence, Gerardo Godoy, Manuel Rivas, Basclay Zapata y otros.

h) Dichos de Miguel Ángel Rebolledo González de foja 897, fue detenido el 09 de agosto de 1974, en circunstancias que se encontraba en casa de sus padres en la comuna de La Reina, por un grupo de agentes de la DINA, que lo trasladaron al recinto de Londres 38, donde fue interrogado mediante torturas, logrando posteriormente identificar a Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, Basclay Zapata apodado "El Troglo" y al "Guatón Romo".

i) Declaraciones de Basclay Humberto Zapata Reyes, de foja 471 y 568, en cuanto sostiene que la agrupación Caupolicán, a cargo del Capitán Miguel Krassnoff y la integraban el "Guatón" Romo, el "Pato", el "Muñeca", Tulio Pereira, el conductor de Krassnoff de apellido Concha y Teresa Osorio que era secretaria; el cuartel de Londres 38, estaba al mando de Moren Brito, seguido por los Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy, cuartel en el que permanecieron entre los meses de marzo a octubre de 1974. Hace presente que en ese periodo tenía el grado de Cabo Segundo, conducía vehículos motorizados y las órdenes que cumplía provenían directamente de Miguel Krassnoff, capitán Miguel o "Don Alberto". Todos quienes estaban en Londres 38 se fueron a José Domingo Cañas, fue como un cambio de casa solamente. Señala que en el mes de Febrero o Marzo del año 1975, aproximadamente, se dispuso el cambio a otro cuartel operativo, llegando entonces a Villa Grimaldi y en esa etapa definitivamente pasó a depender directamente de Miguel Krassnoff, manteniendo las mismas labores que desempeñaba anteriormente, es decir operativamente. En DINA trabajó desde el mes de noviembre de 1973 hasta el mes de enero de 1977, señalando que no le correspondió participar en la desaparición de detenidos. Agrega que en la DINA también trabajaron como colaboradoras y analistas tres mujeres que en un principio fueron detenidas, Luz Arce, la "Flaca Alejandra" y "Carola", quienes eran manejadas directamente por Miguel Krassnoff, quien posteriormente hizo los trámites para que éstas mujeres fueran contratadas por la Institución.

En foja 568 señala que en el mes de julio de 1974, no sabe si estaba prestando servicios en el cuartel Londres 38 o bien ya se habían trasladado al de calle José Domingo Cañas. Expresa que Miguel Krassnoff era su jefe, de hecho fue el único jefe que tuvo durante todo su paso por la DINA y Krassnoff tenía un grupo de 8 a 10 personas a su cargo. Agrega que ubica a Luz Arce, ella junto a la "flaca Alejandra" y la "Carola" llegaron a

Londres 38 como detenidas y era Krassnoff quien manejaba la situación de ellas, las que tenían una situación privilegiada, que fue más evidente en Villa Grimaldi.

Octavo: *Que, con los referidos elementos de cargo queda suficientemente establecida la participación, que en calidad de autor le correspondió al mencionado Miguel Krassnoff Martchenko, en el delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, atento que los datos de convicción reseñados en el motivo anterior, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten, en relación con la participación, tener por acreditado que entre los encargados permanentes del recinto de detención de la DINA ubicado en calle Londres 38, donde estuvo detenido la víctima de autos, como agente operativo y direccionando los interrogatorios estaba Miguel Krassnoff Martchenko, el que participó directamente en ellos, por lo que no sólo estaba en pleno conocimiento de que se mantenían personas en calidad de detenidas en ese recinto y que se efectuaban interrogatorios bajo tormentos, sino que ordenaba su detención, en su calidad de jefe de grupo.*

Lo anterior permite adquirir el convencimiento necesario para concluir que Krassnoff participó como autor material en el delito de secuestro en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides.

Miguel Krassnoff Martchenko, no era analista ni un simple oficial subalterno sin poder de mando, como se pretende sostener en sus declaraciones, sino que por el contrario, está sobradamente demostrado que daba todas las directrices para perseguir, combatir, detener e interrogar a todos los prisioneros, en un cuartel que tenía a su disposición y le permitía, disponer de todos los medios para su misión, incluso detener e interrogar personalmente a los militantes de los movimientos contrarios al gobierno militar, por lo que su participación también se concreta en los términos del citado N° 3 artículo 15.

Noveno: *Que, a su turno, el encausado César Manríquez Bravo en sus indagatorias de foja 732 y 780, expresa que se desempeñó en DINA desde fines de noviembre de 1973, con el grado de Mayor y hasta fines de noviembre de 1974, fecha en que volvió al Ejército y fue destinado a mandar un Regimiento a Rancagua. Las funciones que cumplió en DINA fueron administrativa y de logística consistente en alimentar y alojar a*

grupos de personas en la localidad de Rocas de Santo Domingo, estando a cargo de las instalaciones hasta mediados de enero de 1974, fecha en que se le traslada con el personal que permanecía en Santo Domingo a Rinconada de Maipú, a una instalación que era el centro de perfeccionamiento del magisterio dependiente de la Universidad de Chile, recibiendo esas instalaciones en cuanto a su inventario y comenzó a desempeñarse administrativa y logísticamente en ellas, hasta noviembre de ese año 1974, fecha en la cual le entregó a Pedro Espinoza; dice que no es efectivo que entregó el cargo de la BIM a Pedro Espinoza, que nunca vio un informe de inteligencia, nunca interrogó a nadie, nunca dispuso que se interrogara a nadie ni menos que se matara. El personal o agentes de la DINA, realizaban educación física, defensa personal, disparo con armas cortas y como había muchos que eran de provincia hubo que enviarlos de paseo por Santiago. Estos agentes alojaban, comían y se atendían sanitariamente, en espera de una destinación o misión específica que pudieran recibir desde Santiago. Agrega que no tuvo nombre operativo en la DINA, porque no cumplió funciones operativas, solo de logística y administrativas, que primero trabajó en las Rocas de Santo Domingo y de ahí en la Rinconada de Maipú. El horario de trabajo en las Rocas de Santo Domingo era continuado pero en Rinconada era de 08:00 a 18:00 horas. Dice que la DINA era dirigida por el Coronel Manuel Contreras Sepúlveda y ante él se presentó cuando lo mandaron destinado, que el cuartel General de la DINA estaba ubicado los primeros meses en la calle Santa Lucía y después en Marcoleta y Belgrado, ya que concurría mensualmente a rendir cuenta de los dineros que se le entregaban para alimentar y mantener la instalación de Rinconada de Maipú, teniendo entendido que el Director de DINA dependía del Comandante en Jefe de Ejército de esa época, Augusto Pinochet Ugarte. Señala que la Brigada de Inteligencia Metropolitana, era uno de los organismos dependientes de la organización general de la DINA y fue una gran sorpresa cuando firmó su hoja de vida de junio o julio de 1974, en la cual se encontró con una anotación donde figuraba como comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, anotación que le había calificado el Coronel Contreras en buena forma, sin hacer ningún reparo y la firmó. Posteriormente, supo que la BIM era un organismo dependiente de la DINA y que tenía dos funciones, una operativa y una logística y que él estuvo a cargo la logística. La parte operativa dependía del cuartel general de Santiago, los jefes de grupo operativos recibían

instrucciones directas del director de la DINA y no pasaban por él porque no tenía la función operativa, sino solamente la logística y administrativa. Los grupos operativos poco a poco fueron dejando de ir a Rinconada a alimentarse y dormir y se fueron quedando en Santiago, desconociendo en donde se quedaban y quien los empezó a alimentar; además no sabía que hacían o que misiones realizaban. Después que se fueron desprendiendo los grupos, quedó solo con el personal necesario para la mantención de la instalación, no alojando en Rinconada los solteros y recuerda que acondicionó una enfermería para los agentes que estaban enfermos y un taller de mantenimiento de los vehículos. Dice que no hubo plana mayor en la BIM, porque la hubiese conocido y habría trabajado con ella. Reitera que supo que estaba encuadrado como comandante de una organización llamada BIM, solamente cuando concurrió a firmar su hoja de vida, no dándole mayor importancia en esa época. Afirma que no prestó servicios en la Brigada Caupolicán y en esa época desconocía de su existencia y no estuvo radicada ni funcionando operativamente en Rinconada de Maipú, puede que algunos de los agentes pertenecientes a esa Brigada hayan estado en Rinconada, pero no cumplían actividades operativas ahí en la instalación, desconociendo si esa Brigada posteriormente hubiese operado en Villa Grimaldi. Señala no conocer ningún grupo operativo, ni quienes lo integraban, ni sus nombres, ni sus jefes, no los conoció nunca en esa época ni donde operaron, ni los sistemas de turnos que hubieran tenido. Respecto de Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata y otros agentes de DINA, dice no conocerlos porque no era su función identificarlos, para él eran grupos o personas que llegaban a comer, alojar o a sanarse cuando estaban enfermos, ignorando lo que los grupos Halcón, Aguila, Tucán y otros hacían. Se desempeñó en los cuarteles de Rocas de Santo Domingo, Cuartel Rinconada de Maipú y el inventario que hizo de Villa Grimaldi, fue durante una semana en el mes de marzo o abril de 1974, en las mañanas ya que en las tardes volvía a Rinconada. En Villa Grimaldi hubo que hacer un inventario completo de todo lo existente, vajilla, mobiliario, instalaciones que allí existían. Agrega que nunca tuvo oficina en Londres N° 38, José Domingo Cañas, Venda Sexy y Villa Grimaldi. Respecto de Cuatro Álamos dice que sabía que era una instalación más de la DINA, lo supo posteriormente e ignora la diferencia entre Cuatro y Tres Álamos. Además, dice que no supo que existía el cuartel Londres N° 38 en el periodo que estuvo en la DINA, no lo conoció ni nunca supo que existiera, ni quien

lo ocupaba, ni quien lo mandaba. En esa época, no tuvo conocimiento que hubo personas detenidas en los cuarteles que se le mencionaron, desconociendo el número aproximado de ellas, las circunstancias físicas y que hubiesen sido interrogados bajo tortura, porque no era su función mientras estuvo en la organización. Hizo presente que no fue de la especialidad de inteligencia en el Ejército.

En foja 780 señala respecto de Joel Huaiquiñir Benavides, que no tiene antecedentes de esa persona, ya que no cumplía funciones operativas. El apodo de “Huaico”, no le es conocido. Sostiene que en julio de 1974 estaba en el cuartel Rinconada de Maipú, en la comuna de Maipú, donde cumplía funciones logísticas administrativas para el personal de la DINA que concurría a alimentarse y alojar en dichas Instalaciones, siendo su jefe el Coronel Manuel Contreras Sepúlveda y que ninguno de sus subordinados era operativo sólo logísticos, entre ellos, cocineros, guardias mecánicos y otros.

Décimo: *Que, de acuerdo a las declaraciones indagatorias antes consignadas, resulta claro que este acusado no reconoce participación en la comisión del ilícito configurado, por lo que corresponde revisar si hay antecedentes suficientes para formarse la convicción de su participación en el delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides.*

En la causa han declarado ex agentes de la DINA y hay información suficiente de ex detenidos que el acusado César Manríquez Bravo, no tuvo ninguna actividad en los cuarteles de Londres 38 y Cuatro Álamos de la DINA, ya sea como agente operativo o como autoridad con poder de mando en su interior, sin que con los datos de convicción allegados al proceso se pueda establecer alguna forma de participación en los secuestros investigados.

En efecto, no hay ninguna información probatoria relevante, sea en relación con la participación efectiva o la intelectual, por la jefatura que tenía en la DINA, que hagan presumir que conoció o no podía menos que conocer de los hechos ocurridos al interior del recinto de detención y tortura de Londres 38 que lo incriminen en los ilícitos acreditados en la causa.

Desde luego, no hay ningún testimonio ni otro antecedente que permita concluir fundadamente que tenía conocimiento de lo que sucedía al interior de Londres 38 y/o de las órdenes que impartía Miguel Krassnoff Martchenko.

Está demostrado, que a la época de los hechos, este acusado estaba adscrito a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), en la que tenía un cargo destacado, pero ello no alcanza para presumir que conoció o debía conocer, en virtud del mando que ostentaba, que Londres 38 albergaba en forma clandestina a detenidos de movimientos contrarios al régimen militar de la época.

Por último, si bien no resulta creíble que este oficial desconociera toda actividad represiva en los recintos a su cargo, esa sola circunstancia de estar mintiendo no es suficiente para establecer la participación que se le atribuyó en la acusación judicial, por lo que de acuerdo a lo que se dirá más adelante, será absuelto de los cargos formulados en su contra.

Undécimo: *Que, conforme a lo que dispone el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, sólo es posible condenar a una persona cuando el sentenciador, a través de los medios probatorios establecidos en la ley, llegue a la convicción de que se ha cometido un delito y que en él, le ha correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley, convencimiento que en este caso, respecto de la participación de César Manríquez Bravo, este fallador no ha adquirido, por lo que no es posible dictar sentencia condenatoria a su respecto.*

De esta manera, se concuerda con la defensa del acusado, la que en su presentación de foja 1153 pidió se dictara sentencia absolutoria por falta de participación, ponencia, como se dijo, este juez acepta en cuanto no ha sido posible establecer alguna participación penalmente relevante.

Precisamente, como lo señala la defensa, en la causa no hay elementos suficientes para presumir fundadamente que Manríquez Bravo fue autor del delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides, en los términos de lo preceptuado en el artículo 15 del Código Penal, sin que se den los presupuestos para que exista prueba completa para acreditar su participación como autor.

Duodécimo: *Que, a su turno, el encausado Basclay Humberto Zapata Reyes, en sus indagatorias de foja 471 y 568, sostiene que a fines de Noviembre de 1973, junto a otros 10 funcionarios de planta y cerca de 12 soldados conscriptos, todos de la misma unidad, fueron enviados al sector de Las Rocas de Santo Domingo, en la comuna de San Antonio, lugar en el que se les informó e instruyó para el desarrollo de labores en el área de inteligencia, en síntesis, era recordar el tratamiento que debe recibir la documentación clasificada. Luego del curso fue destinado al*

aparato logístico del Cuartel General, cumpliendo labores de conductor de vehículos motorizados. En el año 1974, en el mes de marzo aproximadamente, su lugar de trabajo se situaba en el cuartel de Belgrado. Dice que en ese tiempo la logística del Cuartel General estaba dividida en diversas unidades, como Londres 38, José Domingo Cañas y posteriormente Villa Grimaldi. Agrega, que personalmente formó parte de la agrupación Caupolicán, a cargo del Capitán Miguel Krassnoff y la integraban el “Guatón” Romo, el “Pato”, el “Muñeca”, Tulio Pereira, el conductor de Krassnoff de apellido Concha y Teresa Osorio que era secretaria. Dice que el cuartel de Londres 38, estaba al mando de Moren Brito, seguido por los Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy, cuartel en el que permanecieron entre los meses de marzo a octubre de 1974, luego de lo cual, los oficiales antes señalados, se trasladaron a calle José Domingo Cañas, donde cumplían sus órdenes, que consistían en labores netamente operativas, es decir, allanamientos, seguimiento y detenciones. Hace presente que en ese periodo tenía el grado de Cabo Segundo, conducía vehículos motorizados y las órdenes que cumplía provenían directamente de Miguel Krassnoff, capitán Miguel o “Don Alberto”, chapa empleada durante toda su permanencia en la DINA. Todos quienes estaban en Londres 38 se fueron a José Domingo Cañas, fue como un cambio de casa solamente. Señala que en Febrero o Marzo del año 1975, se dispuso el cambio a otro cuartel operativo, llegando entonces a Villa Grimaldi y en esa etapa definitivamente pasó a depender directamente de Miguel Krassnoff, manteniendo las mismas labores que desempeñaba anteriormente, es decir operativamente. En DINA trabajó desde el mes de noviembre de 1973 hasta el mes de enero de 1977, señalando que no participó en la desaparición de detenidos. Agrega que en la DINA también trabajaron como colaboradoras y analistas tres mujeres que en un principio fueron detenidas, Luz Arce, la “Flaca Alejandra” y “Carola”, quienes eran manejadas directamente por Miguel Krassnoff, el que hizo los trámites para que éstas mujeres fueran contratadas por la Institución.

En foja 568 dice respecto de Joel Huaiquini Benavides, que no lo ubica ni reconoce. Tampoco le suena el apodo de “Huaico”. Agrega que nunca fue a Cuatro Álamos a retirar gente o buscar algún documento, ni nada. En julio de 1974, no sabe si estaba prestando servicios en el cuartel Londres 38 o bien ya se habían trasladado al de calle José

Domingo Cañas. Expresa que Miguel Krassnoff era su jefe, de hecho fue el único jefe que tuvo durante todo su paso por la DINA y Krassnoff tenía un grupo de 8 a 10 personas a su cargo. Agrega, que Manuel Contreras era el director de la DINA en esa época, quien visitaba regularmente los cuarteles en que estuvo, se reunía con el mando encargado del respectivo cuartel, llegando de improviso y de esas visitas no se enteraban con anterioridad; ubica a Luz Arce, ella junto a la “flaca Alejandra” y la “Carola” llegaron a Londres 38 como detenidas, eran como algo que no se podía tocar, eran como una burbuja y era Krassnoff quien manejaba la situación de ellas, las que tenían una situación privilegiada, que fue más evidente en Villa Grimaldi.

Décimo tercero: *Que, de acuerdo a las declaraciones indagatorias antes reseñadas, el acusado Basclay Humberto Zapata Reyes no reconoce participación en la comisión del ilícito materia de autos. No obstante ello, y para convencerlo y convencer a este sentenciador de que efectivamente tiene responsabilidad en los hechos punibles, concurren en su contra los siguientes elementos de cargo:*

a) *Sus propias declaraciones de foja 471 y 568, en cuanto sostiene que personalmente formó parte de la agrupación Caupolicán, a cargo del Capitán Miguel Krassnoff y la integraban el “Guatón” Romo, el “Pato”, el “Muñeca”, Tulio Pereira, el conductor de Krassnoff de apellido Concha y Teresa Osorio. Agrega que el cuartel de Londres 38, estaba al mando de Moren Brito, seguido por los Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy, cuartel en el que permanecieron entre los meses de marzo a octubre de 1974, se trasladaron a calle José Domingo Cañas, donde cumplían sus órdenes, que consistían en labores netamente operativas, es decir, allanamientos, seguimiento y detenciones. Las órdenes que cumplía provenían directamente de Miguel Krassnoff, capitán Miguel o “Don Alberto”, chapa empleada durante toda su permanencia en la DINA.*

b) *Copias de declaraciones judiciales de foja 12 y 36 de Cristián Van Yurick Altamirano, en las que señala que fue detenido el 12 de julio de 1974 en la comuna de La Reina, por efectivos de la DINA de un grupo especial denominado Halcón 1 y que estaba conformado por Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo a quien conocía y Basclay Zapata, los que se encontraban avocados a la desarticulación del MIR. Mientras estaba detenido, vio a los agentes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro*

Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata, Osvaldo Romo y Fernando Lauriani.

En foja 36 relata los hechos relacionados con su detención, en la cual participaron Miguel Krassnoff al que le decían “Capitán Miguel” con quien tuvo varios encuentros durante su cautiverio, además de Osvaldo Romo y otro al que llamaban “Troglo”.

c) Declaración jurada de Mario Enrique Aguilera Salazar de foja 58 y copias de declaraciones judiciales de fojas 68 y 100, en cuanto señala que fue detenido el 12 de agosto de 1974 por efectivos de la DINA y conducido al recinto de calle Londres 38, luego al recinto de calle José Domingo Cañas, Cuatro Álamos y Tres Álamos, hasta que salió del país en junio de 1975. Señala que su detención se produjo en la vía pública por un grupo de tres civiles, tomando conocimiento que uno de los partícipes era apodado “Troglodita” y que en la cabina del vehículo en que se le trasladó se encontraba una mujer de nombre Luz Arce, a quien conocía con anterioridad y junto a ella Osvaldo Romo.

En foja 68 señala que recoció entre quienes lo detuvieron a “El Troglo” de nombre Basclay Zapata, quien además junto a Osvaldo Romo participaron en sus torturas.

A foja 100 agrega que en el cuartel de la DINA de Londres 38, fue interrogado y torturado varias veces por Basclay Zapata y Osvaldo Romo.

d) Copias de declaraciones de León Gómez Araneda de foja 77 y 290, en las que asevera que era militante del Partido Socialista, por lo que fue detenido el 15 de julio de 1974, mientras estaba en su domicilio, lo llevaron al recinto de Londres 38, donde fue interrogado mediante aplicación de torturas por quienes identificó como Osvaldo Romo, Basclay Zapata y el “cara de santo”.

e) Copia autorizada de orden de investigar de foja 91, en la que el Departamento V de la Policía de Investigaciones da cuenta que Mario Aguilera Salazar fue detenido el día 12 de agosto de 1974 en la vía pública por agentes de la DINA, entre los cuales se encontraba Osvaldo Romo Mena, Basclay Zapata Reyes y un tercero que no logró identificar, quienes además se encontraban acompañados por Luz Arce Sandoval.

f) Copia autorizada de declaración judicial de Aníbal Ricardo Villaseñor Muñoz de foja 282, quien afirma que el día 12 de agosto de 1974, fue detenido y trasladado al recinto de Londres y durante toda la permanencia en ese recinto, nunca pudo ver a ninguna otra persona, ya

que siempre permaneció con la vista vendada. Después fue trasladado a Cuatro Álamos, lugar en el que le sacaron la venda. Mientras estuvo en Cuatro Álamos pudo ver a algunos agentes de la DINA como Osvaldo Romo, Basclay Zapata "El Troglo", entre otros.

g) Copia de declaración judicial de Manuel Anselmo Carpintero Durán de foja 303, quien señala que los primeros días del mes de junio de 1974, fue detenido y después de un tiempo fue en el mes de julio de 1974 al recinto Londres 38, donde pudo hablar con varios detenidos.

En foja 540 declara que en Londres 38, fue interrogado por Marcelo Moren personalmente. Salió de ahí en julio o agosto de 1974, con destino a Cuatro Álamos. Estando en Cuatro Álamos, llegó el "Guatón Romo" acompañado del "Troglo", abrió su celda y gritó si estaba ahí Joel Huaiquiñir, luego siguió su camino hasta la pieza grande desde donde sacó a Joel. Escuchó cuando el guatón Romo le dijo que lo iban a "llevar a Temuco" y Joel les dijo que eso era mentira ya que él no tenía relación alguna con Temuco, siendo esa la última vez que supo de él. El motivo por el cual asegura que Romo y el "Troglo" fueron los que lo sacaron, fue porque ya los identificaba de antes, los conocía a ambos desde su paso por Londres 38.

h) Copia del parte policial de foja 363, por el cual la Policía de Investigaciones remite organigrama de la DINA y sus diversos cuarteles, en el que se señala que la Brigada de Inteligencia Metropolitana, estuvo bajo el mando en primer lugar de César Manríquez Bravo, luego de Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito y Carlos López Tapia; la Brigada Caupolicán estaba integrada, entre otros, por los oficiales Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko; además, la agrupación Halcón estaba integrada por Basclay Zapata Reyes y otros agentes.

i) Dichos de Samuel Enrique Fuenzalida Devia de foja 689, en cuanto sostiene que fue destinado a la DINA aproximadamente en octubre o noviembre de 1973, que formó parte de un grupo operativo que operaba en Londres 38, era Caupolicán; añade que los grupos operativos de la Brigada Caupolicán, eran Halcón 1, Halcón 2, Águila, Tucán y Vampiro. Miguel Krassnoff Martchenko mandaba Halcón 1 y Halcón 2 y en ellos estaban Tulio Pereira, Basclay Zapata, apodado El Troglo a quien lo conoció desde un principio. Estos grupos operaron en los cuarteles Ollagüe o José Domingo Cañas y Londres 38, lo que le consta porque los vio. Prestó

servicios en Londres 38 desde enero de 1974 hasta fines de marzo o principios de abril de 1974.

j) Dichos de Erika Cecilia Hennings Cepeda de foja 858, en cuanto señala que fue detenida por agentes de la DINA el día 31 de julio de 1974 en casa de sus padres y su marido Alfonso Chanfreau Oyarce había sido detenido el día anterior, el que fue llevado al recinto de detención de la DINA ubicado en calle Londres 38, lugar al que también fue llevada luego de su detención. En Londres 38 pudo ubicar a los agentes de la DINA, entre los que estaban Marcelo Moren Brito, que al parecer era el jefe del recinto, además Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence, Gerardo Godoy, Manuel Rivas, Basclay Zapata y otros, además de los guardias encargados de la custodia de detenidos. Permaneció detenida en Londres 38 hasta el día 17 de agosto de 1974, para luego ser llevada a Cuatro Álamos.

k) Dichos de Miguel Ángel Rebolledo González de foja 897, en cuanto señala que fue detenido el día 09 de agosto de 1974 y fue trasladado a Londres 38, donde fue interrogado mediante la aplicación de torturas, logrando identificar a quienes lo torturaron como Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, Basclay Zapata apodado "El Troglo" y al "Guatón Romo".

Décimo cuarto: *Que, los elementos de convicción reseñados en el motivo anterior, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten, en relación con la participación del acusado, tener por acreditado que el día 27 de julio de 1974, fue detenido por agentes de la DINA Joel Huaiquiñir Benavides, al que lo trasladaron al centro clandestino de detención de la DINA ubicado en calle Londres N° 38 y luego al centro de detención denominado Cuatro Álamos, perdiéndose su rastro en dicho lugar; el que era utilizado por DINA para mantener privados de libertad a disposición de los equipos operativos, entre los que estaba Basclay Zapata Reyes como agente operativo, que participaba en interrogatorios y como conductor del vehículo en que se desplazaban los agentes de la DINA y se trasladaba a los prisioneros luego de su detención, hasta los diferentes centros clandestinos de detención en que funcionaron, por lo que tenía pleno conocimiento de las acciones que se cometían y las personas que detenían identificándolas por lo menos con sus nombres políticos según señala.*

Lo anterior permite adquirir el convencimiento necesario para concluir que Zapata Reyes participó como autor material en el delito de secuestro de Joel Huaiquiñir Benavides.

Décimo quinto: Que, a su turno, el encausado Orlando José Manzo Durán, en su indagatoria niega toda participación en el delito de secuestro ya tipificado, es así como a foja 769 señala que el 10 de Octubre de 1974, fue citado a la Dirección Nacional de Gendarmería, donde el jefe superior del servicio, le notificó que se haría cargo de un establecimiento carcelario que no pertenecía a Gendarmería, a fin de organizarlo y comandarlo, situación que en varias ocasiones se había producido en la institución, en que oficiales de Gendarmería, por mandato supremo, se creaba alguna unidad de prisiones, debiéndola organizar para incorporarla al servicio, por lo que no puso ninguna objeción a la orden que se le daba. Agrega que se dictó la Resolución N° 1.401, de fecha 10 de Octubre de 1974 del Ministerio de Justicia, ordenando su agregación al nuevo cuartel creado en marzo de 1974, que se denominó “Cuatro Álamos”, figurando en su hoja de vida solamente la agregación con el número de resolución. Luego se le entregó en la Dirección de Gendarmería el oficio, en sobre cerrado, para presentarse a la jefatura superior de la DINA, siendo efectivamente el 28 de Octubre de 1974, en atención a que se habría comprobado en documentos del Archivo Nacional, constancias que acreditarían que al 26 de octubre de 1974, aún trabajaba en la Cárcel Pública de Santiago y a esa fecha, no habría tenido idea de que era la DINA y nadie de Gendarmería sabía dónde quedaba, por lo que tuvo que averiguar por intermedio de unidades de Carabineros para encontrar su cuartel general, que se ubicaba en calle Belgrado, siendo recibido en ese lugar por el Director de la DINA, entonces Coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda, el Mayor Pedro Espinoza, el subjefe de la DINA que era un comandante de Aviación y el jefe del Departamento de Personal. En esa ocasión el Coronel Contreras le explicó que había sido escogido por su capacidad de oficial y su integridad moral para reorganizar y comandar el campamento de detenidos “Cuatro Álamos”. Al hacerse cargo del recinto, determinó crear un sistema administrativo escrito de toda la unidad, lo que rápidamente debió haber llegado a conocimiento de las unidades operativas de inteligencia, que no querían que se llevase anotaciones de ningún tipo. Hubo roces y situaciones desconcertantes en las semanas siguientes, por lo que concurrió a plantearle la situación al Director de la DINA, quien le manifestó que efectivamente las funciones de inteligencia tenían la característica de no estar rodeadas de documentación; dos o tres días más tarde, uno de los ayudantes del

Coronel Contreras le comunicó telefónicamente que su ponencia había sido aceptada plenamente y que organizara el establecimiento en la forma más conveniente. Agrega que durante el tiempo en que permaneció como jefe del recinto, hasta fines de Enero de 1977, la Contrainteligencia de la DINA, en horas de la noche, allanó las oficinas del cuartel, incautándole toda la documentación y dejando sobre su escritorio una misiva que manifestaba el trabajo efectuado por ellos, situación que manifestó al Director de DINA quien le dijo que la Contrainteligencia operaba de esa manera con cualquier unidad de la DINA. En Cuatro Álamos había unas veinte personas detenidas, solamente hombres y que eran unos catorce funcionarios, organizando un sistema de guardias que establecía a un Cabo Primero como Suboficial de Guardia, un Cabo Segundo como Comandante de Guardia y dos Conscriptos como personal de fila, de esa forma funcionó un sistema con una guardia de cuatro hombres, que trabajaba 24 horas, quedando de franco por un día y medio. En cuanto a la salud de los prisioneros, al asumir el mando en Cuatro Álamos, se encontraban en buen estado, sólo un poco agobiados por el encierro, pero en la práctica el recinto más parecía un sanatorio de recuperación que una cárcel, no obstante, durante el tiempo en que fue jefe de ese establecimiento, en varias ocasiones llegaron detenidos baleados por enfrentamientos con los agentes de inteligencia y otros con hematomas en pendencias con las fuerzas que mantenían el orden de la nación, sin recordar la identidad de ninguno de los reos. Señala que al organizar el establecimiento, se instauró un "Libro de Novedades de la Guardia", que se ocupaba en consignar todos los movimientos importantes de la unidad y además se instauró un "Libro de Existencia de Detenidos", que llevaba las columnas correspondientes al número de orden de llegada del detenido, nombre completo, fecha de ingreso al establecimiento, unidad que lo había traído, documentación legal que ordenaba su ingreso, fecha de egreso, documento legal que ordenaba su egreso y un casillero para las observaciones; además se abrió un "Libro de Especies Fiscales de la Unidad", relativo a las especies de cargo fiscal de la unidad y su control. Había además algunos archivadores en donde se ordenaban las siguientes tarjetas: de ingresos de detenidos, salidas de detenidos para diligencias, egresos y cualquier otro papel de importancia. Respecto a las tarjetas de ingreso, correspondían al documento que portaba el funcionario de inteligencia a cargo de los detenidos, no tenía ningún formato especial y

consignaba el nombre de la persona detenida, fecha, timbre rojo de la DINA, y una firma ilegible. Toda esta documentación duraba en la unidad, lo que la contrainteligencia permitía, ya que a cada visita que hacía, se incautaban todos los documentos y había que partir desde cero con nuevos archivos; las fechas de estas operaciones de contrainteligencia no estaban definidas y eran nocturnas, ocurriendo desde Abril de fines de 1976, 1975, hasta no recordando la fecha específica. Respecto de la persona que ejercía el cargo de su superior directo, cada vez que necesitaba algo, tenía que consultarlo a los ayudantes del jefe de la DINA, Coronel Manuel Contreras, sin embargo en muchas ocasiones tenía que rendir cuenta de la existencia de detenidos ante diferentes jefes de Brigadas de Inteligencia, y en algunas ocasiones tuvo que presentarse ante un Comandante de Villa Grimaldi de apellido Manríquez. Señala que debido al estricto compartimentaje, ningún funcionario de alguna unidad operativa de inteligencia de la DINA le informaba de alguna persona que iba a desaparecer en determinada fecha, el compartimentaje le impedía interiorizarse mayormente sobre los detenidos, sólo debía bastarle la persona y algunas señas de su identidad.

En foja 777 señala respecto de las fotografías que le fueron exhibidas que no reconoció a ninguna de las personas como detenidos del cuartel Cuatro Álamos. Luego en foja 785, dice que debido a los roces entre él como jefe de Cuatro Álamos y los oficiales de la DINA, ya que no se le daba la libertad de reorganizar su recinto a las condiciones que se efectuaban en Gendarmería, el Coronel Contreras Sepúlveda estableció ante el personal que él, que la DINA no tenía mando sobre Cuatro Álamos, ya que había sido traído especialmente para ese cargo y que quedaba dependiendo directamente del Ministerio del interior que iba a ordenar todo lo relacionado con detenidos, libertades y traslados, como salidas de detenidos fuera de establecimiento. Señala que cuando llegó a Cuatro Álamos no eran 20 sino sólo 6 los detenidos que había y que se hizo cargo del recinto desde el 28 de octubre de 1974 como jefe administrativo y fue reemplazado en el mando por el capitán de Carabineros Ciro Torré Sáez, entre enero o febrero de 1976. En cuanto a Joel Huaiquiñir Benavides, quien fue detenido el 27 de julio de 1974 y era apodado el "Huaico", señala no poseer antecedentes.

Décimo sexto: Que, de acuerdo a las declaraciones indagatorias antes reseñadas, este acusado no reconoce participación en la comisión del

ilícito configurado. En la causa y para convencer a este sentenciador de que efectivamente tiene responsabilidad en el hecho punible, se allegaron los siguientes elementos de cargo:

a) Sus propios dichos de foja 769, 777 y 785, en cuanto señala que estuvo a cargo de Cuatro Álamos, siendo designado comandante de dicho centro de detenidos, que era una unidad dependiente de la DINA, donde se desempeñó hasta 1977 y en ese recinto los detenidos estaban incomunicados, sin comunicación con el exterior.

b) Copia del parte policial de foja 363, por el cual la Policía de Investigaciones remite organigrama de la DINA y sus diversos cuarteles, en el que se señala que la Brigada de Inteligencia Metropolitana, dependiente del Departamento Interior, de la Dirección de Operaciones de DINA, estuvo bajo el mando en primer lugar de César Manríquez Bravo, luego de Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito y Carlos López Tapia; la Brigada Caupolicán estaba integrada, entre otros, por los oficiales Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko; además, la agrupación Halcón estaba integrada por Basclay Zapata Reyes y otros agentes. En cuanto al cuartel de Londres 38 o Yucatán, los jefes de dicho recinto fueron Ciro Ernesto Torré Sáez, Miguel Krassnoff Martchenko y otros. En cuanto al recinto de detención Cuatro Álamos, el jefe del recinto fue Orlando José Manzo Durán.

Décimo séptimo: Que, los elementos de juicio anteriormente reseñados, ponderados en su mérito, carecen del valor probatorio suficiente para obtener la íntima convicción de que Orlando José Manzo Durán haya participado en calidad de autor, cómplice o encubridor en el delito de secuestro de Joel Huaiquini Benavides, por lo que a su respecto debe acogerse la petición de absolución por falta de participación pedida por su defensa al contestar la acusación de oficio y adhesiones a foja 1058. En esta circunstancia al no haberse adquirido por este Juez, con las probanzas recogidas durante la investigación, la necesaria convicción de que éste haya tenido participación en ese delito, debe dictarse a favor de éste sentencia absolutoria, cumpliéndose de esta manera con la norma del artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal.

Décimo octavo: Que, en efecto, el acusado Orlando José Manzo Durán ha sostenido en su escrito de defensa que en la época en que habría permanecido la víctima detenida en el centro de detenidos

*“Cuatro Álamos”, no se encontraba prestando servicios en dicho recinto, ya que fue destinado en comisión de servicios a la Dirección de Inteligencia Nacional el 01 de octubre de 1974 y asumió sus funciones el día 28 de octubre del mismo año, exculpaciones que concuerdan con las anotaciones de su **Relación de Servicio remitida por Gendarmería de Chile que rola a foja 1298 y siguientes** y también con la **copias autorizadas del libro de novedades de la guardia de la ex Cárcel Pública, agregado a foja 1482 y siguientes**, donde se consigna que el 26 de octubre de 1974 hizo entrega de su arma de cargo, todo lo cual, unido a los demás antecedentes, permiten al sentenciador arribar a la convicción de que éste, tal como lo expuso en su contestación, no participó como custodio de la víctima Joel Huaiquiñir Benavides en el recinto de detención de la DINA “Cuatro Álamos”, como tampoco en alguno de los hechos que culminaron con su desaparición forzada.*

Conforme a lo expuesto, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de sus restantes alegaciones planteadas en su escrito de contestación de fojas 1058.

Décimo nono: *Que, los antecedentes probatorios reseñados en los motivos 7° y 13°, y los hechos inculpativos que se tienen por establecidos en los apartados 8° y 14°, unidos a las propias declaraciones de Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes, en cuanto se desempeñaba como jefe del equipo operativo encargado de la represión de movimientos contrarios al gobierno militar en el cuartel de Londres 38, el primero; y como integrante del equipo que tenía por objetivo individualizar y detener a los integrantes de movimientos contrarios al gobierno militar como lo era el Partido Socialista el segundo de los nombrados, permiten tener por debidamente acreditada la participación, en calidad de **coautores**, de los indicados Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes en la perpetración del delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides.*

Con respecto a ellos la participación lo fue en los términos del artículo 15 N° 1; Miguel Krassnoff Martchenko como oficial con poder de decisión en las detenciones e interrogatorios que se practicaban al interior del recinto de calle Londres, y Zapata Reyes como agente operativo y participe en detenciones e interrogatorios, no podían menos que conocer sus propios actos, las acciones de sus subalternos, las identidades y circunstancias sobre la detención de la víctima, que se encontraba

ilegítimamente privada de libertad en los recintos de dicho organismo denominado Londres 38 o Yucatán y luego en Cuatro Álamos, como el trato recibido por sus aprehensores y su último destino.

Se demostró, en las reflexiones anteriores que había un concierto previo para ubicar, detener y trasladar a los recintos de Londres 38 y Cuatro Álamos, en la época en que se produce la detención de Joel Huaiquiñir Benavides, a la mayor cantidad de integrantes de los movimientos contrarios al gobierno militar, asunto que estaba a cargo en su dirección ejecutiva y operacional por los acusados, los que facilitaban los medios necesarios para que se llevara a efecto el traslado contra la voluntad de las víctimas, incluso con la participación directa en los interrogatorios. Comportamiento que se ha establecido en otras causas relacionadas con las violaciones de los Derechos Humanos, por lo que se puede hablar de una reiteración y conducta permanente en situaciones de la misma especie.

Los acusados han intervenido en el objetivo final que se perseguía con la detención de los integrantes del Partido Socialista, los cuales eran interrogarlos bajo tortura permanente sin importarle las consecuencias, para que entregaran todo tipo de información sobre otros miembros de esa colectividad política.

Defensas.

Vigésimo: *Que, la defensa del acusado Basclay Humberto Zapata Reyes en foja 1037, plantea como alegación la falta de participación de su representado en los hechos imputados refiriéndose en primer lugar, a los elementos que el Tribunal tuvo en cuenta para acusarlo, los que a su juicio, no permiten adquirir la convicción de que le ha correspondido participación en los hechos que se le imputa, acorde a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no se desprende actividad dolosa alguna por su parte en la detención y posterior desaparición de la víctima y que para acusar a su representado, se tuvo única y exclusivamente presente que desde la fecha de la detención de la víctima o desde la consumación del delito, se desconoce su paradero o el de sus restos luego de haberlo visto supuestamente detenido en los cuarteles de la DINA conocidos Londres 38, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, desde donde se pierde su paradero. Señala que tampoco hay en el proceso antecedentes que permitan elaborar presunciones judiciales para dictar una sentencia condenatoria,*

ya que, no hay indicios reales y probados que sustenten su participación en la desaparición de las víctimas. No cabe duda, que las afirmaciones vertidas en el proceso no son múltiples y graves, son discordantes entre ellas, conducen a conclusiones diversas y no se refieren a su representado, nadie lo indica como supuesto aprehensor de la víctima y nada indica que este hubiera ordenado la comisión del ilícito de autos y no habría en el proceso ninguna consideración que señale cual fue su participación en el hecho. Indica en síntesis, que las presunciones no cumplen los requisitos exigidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y que al analizar los autos podrá concluirse que las declaraciones vertidas en el proceso no permiten presumir que su defendido tuvo relación con la detención de la víctima y su posterior desaparición. Agrega que conforme a lo manifestado por su representado en sus declaraciones, se explaya de su paso por la Dirección de Inteligencia Nacional, señalando su participación, sus jefes y los hechos por él conocidos, en efecto en su calidad de funcionario público perteneciente al Ejército, es destinado a DINA y en tal virtud debió cumplir las órdenes impartidas por sus superiores.

Concluye señalando que su representado no tiene participación en el delito por el cual se le acusa y no hay antecedentes para que acorde al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal haya adquirido convicción para acusarlo y menor pretender condenarlo, pues no basta con presumir su participación, sino que debe probarse en forma categórica lo que naturalmente estaría lejos de suceder en el proceso, por lo que debe ser absuelto de toda responsabilidad penal.

Vigésimo primero: *Que, la alegación anterior se desestima atento que como se razonó en los motivos décimo cuarto y décimo octavo, la participación que le correspondió a Zapata Reyes, como autor en el secuestro, ha quedado palmariamente demostrada, toda vez que tuvo una actividad material y directa, en la privación de libertad e interrogatorio de la víctima, lo que se encuentra demostrado con los datos de cargo analizados en el apartado décimo tercero de este fallo, los que son de una contundencia máxima, que no fueron desvirtuados por la defensa.*

La sola circunstancia de negar toda actividad criminal no es suficiente cuando en la causa hay datos directos que lo vinculan a la participación material en la detención y en los interrogatorios de esta

víctima y de otras, en un *modus operandi* que se repite tanto en la forma, como en los agentes que intervienen.

Vigésimo segundo: Que, la defensa del acusado Orlando José Manzo Durán a foja 1058, plantea como alegación la exención de responsabilidad penal conforme al artículo 159 del Código Penal, toda vez que su representado al ser destinado desde su Institución a la DINA, lo hizo con la única y exclusiva función, según se le manifestó, de hacerse cargo de un recinto de detención y como tal, debió cumplir las órdenes de sus superiores a quienes les debía obediencia disciplinaria por lo que las penas solo deben aplicarse a los superiores del acusado Manzo y no a él, quien en virtud de la norma invocada quedaría absuelto de responsabilidad penal, más aún cuando él era un Oficial de Gendarmería instruido para realizar una actividad relacionada con la custodia de presos.

Vigésimo tercero: Que, en segundo término plantea la falta de participación en los hechos imputados en razón a que en los centros de detención y tortura denominados Londres 38, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, permaneció detenida la víctima de autos, quien fue vista por última vez en agosto del mismo año y a juicio de esa defensa los elementos que configuran su auto de procesamiento y posterior acusación no permiten al Tribunal adquirir la convicción de que le ha correspondido participación en los hechos que se le imputan acorde a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no se desprende actividad alguna por parte de Manzo, en la detención y posterior desaparecimiento de la víctima, ya que su representado a la fecha de los hechos no se encontraba en Cuatro Álamos, lo cual demostraría con los documentos acompañados y los propios hechos acreditados por el Tribunal fijando la detención en el mes de julio y que se le mantuvo privado de libertad hasta agosto de 1974, desconociéndose desde entonces su paradero. Señala que para acusar a su representado se tuvo única y exclusivamente presente, que desde la fecha de la detención de la víctima y desde la consumación del delito noventa días después de dicha fecha el cuartel de Cuatro Álamos, desde donde se pierde su paradero, su representado no estaba en dicha unidad. Alega que no existen en el proceso antecedentes que permitan elaborar presunciones judiciales para dictar una sentencia condenatoria, ya que no hay indicios reales y probados que sustenten su participación en la

detención y posterior desaparición de la víctima, ya que las afirmaciones vertidas en el proceso conducen a conclusiones diversas y no se refieren a su representado, nadie lo indica como supuesto aprehensor de la víctima, y nada indica que este hubiera ordenado la comisión del ilícito de autos, en síntesis no hay en el proceso ninguna consideración que señale cual fue su participación en el hecho, lo que es de toda lógica, en atención a que a la fecha de los hechos, no se encontraba en Cuatro Álamos.

Vigésimo cuarto: *Que, como última alegación, dice que la calificación jurídica de secuestro calificado, es absolutamente alejada de la realidad de los hechos, dado la falta de antecedentes y pruebas en que se fundamenta, toda vez que nada permite concluir que la víctima se encuentra detenida o encerrada actualmente, además de que su representado nunca habría tenido conocimiento que la DINA desempeñó actividades ilícitas, toda vez que se le destinó a una entidad creada por ley. Por estas consideraciones no se podría presumir que Manzo tuvo relación con las detenciones de las víctimas y su posterior desaparición y conforme a lo manifestado por su representado, que en su calidad de funcionario público perteneciente a Gendarmería, es destinado a la DINA, y que en tal virtud es destinado a Cuatro Álamos a partir del día 28 de Octubre de 1974, lo que llevaría a concluir que su representado no tuvo participación en el delito por el cual se le acusa y no existen antecedentes para que acorde con lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal el Tribunal haya adquirido convicción para acusarlo y menos para pretender condenarlo, pues no basta con presumir su participación sino que ello debe probarse en forma categórica lo que naturalmente está lejos de suceder, por lo que debe ser absuelto de toda responsabilidad penal.*

Vigésimo quinto: *Que, las alegaciones de la defensa del acusado Orlando José Manzo Durán, serán aceptadas sólo en cuanto no quedó demostrada su participación, conforme a lo razonado en los acápites décimo séptimo y décimo octavo.*

En efecto, al analizar los únicos datos incriminatorios que afectan a este acusado, se concluye que ellos son exiguos para mantener la acusación judicial formulada en su contra, pues no permitieron llegar al convencimiento que Manzo Durán tuvo una participación directa o por medio de órdenes o, en razón del mando, en la detención y encierro de la

víctima de autos, toda vez que con el mérito de los documentos que obran en autos se desprende, que a la fecha de ocurrencia de los hechos no se encontraba aún destinado por Gendarmería de Chile a la Dirección de Inteligencia Nacional, por lo que en mérito de ello, se debe absolver al acusado.

Vigésimo sexto: *Que, la defensa del acusado César Manríquez Bravo en foja 1153, renueva como materia de fondo, las alegaciones planteadas como excepciones de previo y especial pronunciamiento, señalando que tanto la amnistía como la prescripción son procedentes; por cuanto a la fecha de los hechos sólo estaban vigentes y ratificados por Chile los Convenios de Ginebra, que en su cláusula tercera establece que las disposiciones de esos tratados no priman sobre la legislación interna de los países contendientes; confirmaría el hecho de que los delitos denominados como de Lesa Humanidad no pueden ser castigados invocando tratados internacionales no vigentes a la fecha de comisión del ilícito y que la Ley 20.357 de 18 de julio de 2009 en su artículo 44 expresamente señala que las disposiciones de imprescriptibilidad de esos delitos sólo rige para hechos posteriores a la promulgación de dicha ley y señala además que conforme al artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, no debería haberse proseguido la acción penal, por encontrarse extinguida la responsabilidad penal del inculpado.*

Vigésimo séptimo: *Que, por otro lado, señala que no existiría en toda la causa ningún elemento o antecedente para que su representado pueda ser acusado del referido delito, lo que se planteó en base a meras presunciones, existiendo sólo algunas confusas declaraciones, el auto acusatorio determina la existencia de cargos para acusar a su representado como autor del delito de secuestro calificado, en la calidad a que se refiere el artículo 15 N° 1 del Código Penal, que deja en claro que hay dos tipos de autor ejecutor del hecho, lo que significa realizar por sí mismo total o parcialmente la acción típica descrita por la ley, o causar el resultado allí previsto por acto propio, sin valerse de intermediarios, así como tampoco como autor indirecto, que son aquéllos que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutar el hecho, tampoco su representado indujo a nadie a cometer los delitos materia de la causa. Tampoco podría considerársele autor cooperador, que hubiese estado concertado con alguien para la ejecución del hecho, hubiese facilitado los medios o lo hubiese presenciado. Agrega que no cumple ninguno de*

los presupuestos para que exista una prueba de su participación como coautor, y ni siquiera como cómplice o encubridor en el delito de secuestro materia de autos. Agrega que no existen hechos reales probados, no hay presunciones múltiples ni graves, no hay concordancia alguna con los hechos del delito de secuestro de la víctima, por lo cual no parece posible que su representado César Manríquez Bravo, aparezca acusado como coautor de tan grave delito sin haber ningún antecedente en la causa, ni ningún testigo que señale que él ha cometido el secuestro. Señala que su representado jamás cumplió en la DINA funciones operativas sino meramente administrativas, prestando servicios primeramente en un cuartel de la localidad de Rocas de Santo Domingo y a mediados de enero de 1974 en Rinconada de Maipú y nunca siquiera conoció el cuartel Yucatán o Londres 38.

Vigésimo octavo: Que, las alegaciones formuladas por la defensa del acusado Manríquez Bravo, será aceptada sólo en cuanto no quedó demostrada su participación, conforme a lo razonado en los acápites décimo y undécimo del presente fallo.

En consecuencia, al analizar los únicos datos incriminatorios que afectan a este acusado, se concluyó que ellos eran insuficientes para mantener la acusación judicial formulada en su contra, pues ellos no permitieron llegar al convencimiento que Manríquez Bravo participó directamente o, por medio de órdenes o, en razón del mando, en la detención y encierro de la víctima de autos, por lo que en mérito de ello, se le debe absolver.

Vigésimo nono: Que, la defensa del acusado Miguel Krassnoff Martchenko en su presentación de foja 1198, pide sea absuelto de los cargos por concurrir la amnistía y la prescripción de la acción penal. En lo relativo al primer aspecto dice que corresponde dar aplicación a la amnistía, consagrada en el DL N° 2191 de 1978, atento que los hechos por los que se le acusa, están amparados por la mencionada ley de amnistía, la que establece este beneficio respecto de hechos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. La amnistía es un importante pilar del derecho penal, que nació para resolver dificultades surgidas en casos políticos y sociales, situaciones en las cuales se hace necesario y conveniente que el Estado renuncie temporalmente a su facultad de juzgar y castigar determinadas conductas delictuales, en aras de intereses superiores

como el orden y la pacificación social y nacional. Señala que en nuestra legislación la amnistía tiene su expresión jurídica como causal de extinción de responsabilidad penal en el artículo 93 N° 3 del Código Penal, lo que tiene su concreción en el artículo 408 N° 5 del Código de Procedimiento Penal, por lo que al tratarse de una causal extintiva de responsabilidad, resulta inútil e ineficaz la búsqueda del objetivo último de todo juicio criminal. Dice que no parece aceptada la opinión de que estos delitos revisten las características de permanente y esté exceptuado de los efectos de la amnistía, con la hipótesis que a la fecha seguirán cometiéndose en cuanto no se ubique a los presuntos detenidos, tesis que es insostenible, ya que, por lo demás en el proceso no exista el menor indicio que permita sospechar que continúa cometiéndose con posterioridad a fines de agosto de 1974 en Cuatro Álamos, lugar donde la víctima es vista por otros detenidos; que nada impide aplicar la amnistía en lo que concierne al periodo que ella cubre y por otra parte, la hipótesis que persiste después del 10 de marzo de 1978, lo que debería acreditarse en el proceso, no habiendo ocurrido en la investigación del Tribunal.

Además, las acciones referidas a los hechos investigados se encontrarían absolutamente prescritas en atención a que al momento de ejercerse la acción penal, ha transcurrido con creces el plazo de diez años que exige la ley respecto del delito de secuestro calificado, ya que al efecto transcurrió dicho plazo desde la época de los hechos hasta la interposición de la querella. La prescripción penal es una institución jurídica penal que opera por el simple transcurso del tiempo, cuyo propósito es alcanzar la paz social y la seguridad jurídica eliminando la incertidumbre de las relaciones judiciales penales. El artículo 94 del Código Penal, dispone que la acción penal prescribe para crímenes como máximo 15 años, que se cuentan desde que se comete el delito, lo que en el caso de Joel Huaiquiñir ocurrió el 27 de julio de 1974, plazo que ha transcurrido en exceso.

Trigésimo: Que, en lo tocante a la prescripción de la acción penal alegada por las defensas de los acusados, es preciso consignar que tratándose de delitos de Lesa Humanidad, como el que es materia de la acusación, no hay prescripción que pudiera verificarse, atento que conforme al artículo uno de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad

cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son imprescriptibles y por ende pueden ser perseguidos en cualquier tiempo. Al tener esta calidad, resulta inconducente entrar a revisar si se dan los presupuestos que exigen los artículos 94 y siguientes del Código Penal.

En todo caso, hay que tener presente que la prescripción ha sido adoptada más por criterios políticos que por razones dogmáticas, como una manera de alcanzar la paz social y seguridad jurídica, aspectos que en el campo del Derecho Internacional Penal, se considera que son más alcanzables prescindiendo de la prescripción, sobre todo en los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, toda vez que la comunidad internacional ha estimado que estos delitos son siempre punibles, por lo cual se han dictado una serie de documentos, que establecen en forma perentoria la imprescriptibilidad, de manera que el juzgamiento y la eventual condena por ellos siempre sea procedente, cualquiera sea la época en que se cometieron.

Hay normas en nuestra legislación que han reconocido la primacía del Derecho Internacional sobre el derecho nacional, en especial en el campo de los delitos de Lesa Humanidad, por consiguiente, al haber incompatibilidad normativa entre la aplicación del derecho interno y el internacional, hay prevalencia de esta última, por lo que no procede que el transcurso del tiempo constituya una alegación permitida respecto de los delitos de Lesa Humanidad, razón que lleva a que esta la alegación sea desestimada.

Trigésimo primero: *Que, además, con relación a la prescripción se plantea que la Ley 20357, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2009, que tipifica y penaliza los crímenes de Lesa Humanidad, de Guerra y el Genocidio, estableciendo en su artículo 40 que la acción penal y la pena de los delitos previstos en dicha normativa, no prescriben; a su vez, el artículo 44 precisa que los hechos de que trata la ley que se hayan cometido con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento, por lo que las disposiciones de dicha ley, son aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia, de lo que surge preguntarse si con anterioridad a ese cuerpo legal existían en nuestro ordenamiento jurídico los ilícitos de la Ley 20.357. Al respecto, por expreso mandato constitucional y legal la tipificación y penalización de los delitos solo puede hacerse por medio de una ley, de modo que no siendo los tratados*

internacionales una ley, sus disposiciones no pueden tipificar ilícitos ni establecer penas, por lo que si se pretende que dichas conductas sean castigadas en el campo interno debe dictarse la ley respectiva, de lo que se concluye que al no estar tipificados los delitos contenidos en la Ley 20357, con anterioridad a su promulgación, no pueden ser castigados.

Trigésimo segundo: *Que, la ley 20.357, que tipifica los crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y crímenes y delitos de guerra, describió la conducta criminal a que se refieren estos antecedentes, como un ilícito específico y contempló la imprescriptibilidad, esa conducta entró a regir del 18 de octubre del año 2009, por lo que tanto el ilícito como la norma de la no prescripción de la acción penal, solo se aplica a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, pero no hay infracción a su contenido en la presente causa, toda vez, que tal cuerpo normativo no se ha aplicado.*

En efecto, en estos autos se ha tenido por configurado el delito de secuestro calificado, de acuerdo a la norma vigente a la época de su comisión, tanto en lo relativo a los elementos del tipo penal, como a la sanción aplicable, por lo que se está dando pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 20.357.

Ahora bien, en lo que se refiere a su calificación como delito de Lesa Humanidad y a su consecuencia de ilícito imprescriptible, se concluyó por este sentenciador, que ello obedecía a la existencia del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que se entiende incorporado a nuestra legislación interna de la época, de acuerdo a lo dicho en el fundamento quinto de esta sentencia, de esta manera, al no haber legislación nacional sobre la materia, resulta plenamente aplicable la internacional, que si regulaba el tema de la calificación de delito de lesa humanidad y su no prescripción, por lo que no ha habido infracción legal de ninguna naturaleza.

Trigésimo tercero: *Que, en lo que se refiere a la amnistía, tal como se dijo a propósito de la prescripción, el secuestro calificado objeto de la acusación de autos, ocurre en un contexto generalizado de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos existente en nuestro país a esa fecha; constituyendo, a juicio de este Tribunal, un crimen de Lesa Humanidad y un crimen de guerra, respecto del cual necesariamente debe recurrirse a la legislación internacional. En efecto, dicho ilícito no puede ser objeto de amnistía ni prescripción, según lo*

establecen los Convenios de Ginebra de 1949, los cuales, en su artículo tercero común, se refieren al contexto de un “conflicto armado no internacional”, indicando que las víctimas de conflagraciones armadas son ante todo seres humanos y ni siquiera la guerra puede privarlos del mínimo respeto que el individuo exige; constituyéndose éstos en principios universales, acordados por la comunidad internacional toda y preconizada por ésta, que tienen la característica de ser inderogables, obligatorios y vinculantes para todos los Estados.

De esta manera, se colige que tanto las normas imperativas (*Ius Cogens*), como los referidos tratados internacionales, prevalecen en el caso de autos, por sobre el derecho interno, como ocurriría en el caso de toda nación soberana.

A lo anterior, hay que agregar que el Decreto Ley 2191, dictado en el año 1978 por la misma autoridad que permitía que agentes del Estado cometieran los ilícitos denunciados, no puede auto perdonarse, ya que la amnistía es una institución excepcional, que sólo puede aplicarse en casos especiales, por lo que ella no tiene valor respecto de delitos que implican directamente una violación a los derechos humanos, atento que el acto de autoridad, será inconstitucional y, por ende, ilegítimo.

Trigésimo cuarto: Que, por otra parte, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en fallos dictados con ocasión de otras causas similares a esta, Chile en la época en que ocurrieron los hechos que dieron origen a este proceso, se encontraba en estado de guerra interna, que permite sostener que estábamos en un conflicto armado, en los términos del artículo 3 común para los Convenios de Ginebra, que señala que en tales conflictos, las víctimas son antes que todo seres humanos que ni la guerra puede privarlos del mínimo que el respeto por el individuo exige, de modo que por graves que puedan ser ciertas acciones, no es posible admitir que el poder pueda ejercerse en forma ilimitada, sin contención alguna o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.

Resultando en consecuencia, aplicable los convenios de Ginebra de 1949, los Estados contratantes están obligados, cuando se trate de conflictos armados internos, al trato humanitario de las personas que no participen directamente en las hostilidades, quedando vedado una serie de actos que en definitiva atentan contra la dignidad de la persona

humana, entre otros, la detención arbitraria y privación de libertad permanente y su desaparición. El Estado de Chile al asumir tales formas de actuar, con la suscripción de los indicados convenios, adquirió la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente al ser detenidas, sin que pueden decretarse medidas que amparen los agravios cometidos contra personas determinadas, ni menos buscar la impunidad de sus autores, renunciando a la facultad de exonerarse a sí mismo.

No se puede bajo ningún pretexto, ni aún en el ejercicio de su soberanía interna, ante situaciones anómalas, graves y atentatorias a la persona humana, como los hechos materia de esta investigación, amnistiar todos aquellos actos ilegítimos constitutivos de ilícitos penales, que finalmente lleva como resultado el auto exonerarse por la responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos humanos, por lo que reiterando lo ya dicho, el indicado D.L. 2191, sobre amnistía, resulta inaplicable respecto de lo señalados casos, donde tiene perfecta cabida el secuestro de Joel Huaiquiñir Benavides.

Trigésimo quinto: *Que, la defensa de Krassnoff Martchenko en subsidio de la petición de absolución por haber operado la amnistía y prescripción, plantea que su defendido igual debe ser absuelto por falta de participación, ya que en el proceso no hay elemento alguno que enlace alguna actuación de Krassnoff con la detención o interrogatorio de la víctima de autos, quien fue detenido por civiles no identificados, en su domicilio y fue visto en los recintos de Londres 38 y Villa Grimaldi, no existiendo antecedentes en el proceso de que fue detenido por su representado, interrogado o que haya dispuesto su traslado a otros recintos.*

Trigésimo sexto: *Que, tal alegación se rechaza, ya que la participación que se le atribuye en la acusación judicial, quedó legal y suficientemente comprobada con los antecedentes incriminatorios que han sido detallados en el acápite séptimo, los que son de la gravedad, cantidad y entidad suficientes, que permiten de una manera inequívoca y terminante llegar al convencimiento de que la participación cuestionada, está debida y legalmente demostrada, tal como se concluyó en las reflexiones octava y décimo octava de este fallo.*

En efecto, para demostrar la culpabilidad no se requiere que a quien se le atribuye participación en un hecho ilícito, confiese los cargos que se le imputan, pues dicho medio probatorio no es el único para acreditar la acusación. Este sentenciador, con los datos incriminatorios descritos en el acápite séptimo, ha podido deducir la imputabilidad atribuida a Miguel Krassnoff, los que reúnen las condiciones del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.

Se trata de cargos que lo ubican en el lugar de los hechos, que emanan de afirmaciones efectuadas por víctimas y funcionarios de la propia institución a la que perteneció el acusado, lo que permite sostener que se funda en hechos reales; además, se trata de numerosos testigos que coinciden en lo esencial del ilícito, que el encierro de la víctima se produjo en un recinto secreto, donde habitualmente ejercía poder de mando Krassnoff, el que daba órdenes de detención y de interrogatorios bajo torturas. Se trata de cargos precisos, directos y coherentes, los que llevan a una misma conclusión: Krassnoff estaba a cargo de la desarticulación del MIR y otros grupos contrarios al gobierno militar, persiguiendo a sus militantes sea el cargo que tuviera, sin importarle los medios para llegar a averiguar el paradero de los integrantes de dichos conglomerados, lo que se refleja con los diversos testimonios de las víctimas, que en una época coetánea a la de las víctimas, estuvieron privados de libertad en el cuartel de Londres 38.

La sola alegación de inocencia, sin reconocer su verdadera actividad represiva, no es obstáculo, para formarse la convicción condenatoria, cuando los antecedentes de cargo cumplen con todos y cada uno de los requisitos de las presunciones judiciales, como sucede en esta causa.

Trigésimo séptimo: *Que, además la defensa señala que debe efectuarse una correcta calificación del delito, ya que los empleados públicos, encargados de cumplir órdenes de detención o arresto, en el acotamiento de ellas eventualmente pudieren haberse excedido, no le es aplicable el artículo 141 relativo al secuestro, ya que éstos no actuaban como particulares y además tenían la facultad legal para efectuarlo. De considerarse que los arrestos verificados por el personal de la DINA, infringen alguna disposición y si existiera alguna conducta que pudiera estimarse como ilícita, ella debe encuadrarse en el artículo 148 del Código Penal, pues a los empleados públicos, encargados del*

cumplimiento de las órdenes de detención o arresto, que eventualmente pudieren haberse excedido en sus atribuciones, no le es aplicable el artículo 141 del Código Penal, sino que el 148 del mismo texto.

Trigésimo octavo: *Que, esta propuesta defensiva no se acepta, puesto que la hipótesis penal del mencionado artículo 148 del Código Penal, si bien la cometen funcionarios públicos, lo cierto es que para la configuración de la detención ilegal del artículo 148 del Código Penal, es esencial que ella se haya producido dentro del ámbito de su competencia y en cumplimiento de la función pública que le es propia, lo que no ocurre en la especie, ya que se procedió a la detención de Joel Huaiquiñir Benavides, en forma clandestina, pues los aprehensores no contaban con facultades para ello, ni contaban con orden de autoridad administrativa o judicial competente, como lo exigía el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, del año 1925, vigente a la época y también los artículos 253 y 262 del Código de Enjuiciamiento Penal. También se vulneraron los artículos 14 de la indicada Carta Fundamental y 290 del texto legal procedimental, al haber mantenido detenida a la víctima en un recinto clandestino.*

La diferencia entre una y otra hipótesis penal, radica en que el secuestro se configura cuando el que detiene, carece de todo derecho para privar de libertad a una persona; en cambio, en la detención ilegal, se tiene el derecho, pero se aplica en forma ilegal y arbitraria, esto es, fuera de los casos previstos en la ley y por mero capricho.

Es evidente que los hechos establecidos en autos, se avienen con el secuestro calificado, atento que los acusados carecían de todo derecho para detener a la víctima, que se demuestra no solo por la ausencia de orden, sino que por la motivación de la privación de libertad y la forma clandestina en que ella se produce.

Trigésimo nono: *Que, en cuanto a la exigencia de que el delito de secuestro del artículo 141, en su redacción vigente a la época de los hechos de la causa, sólo se aplica a los particulares y no a los funcionarios públicos, calidad que detentan los acusados, ello no es efectivo, pues este asunto quedó resuelto por la Excma. Corte Suprema en fallo de 17 de noviembre de 2004, en los autos rol N° 2182-98 episodio Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, en el que se distingue con respecto a la detención de una persona, dos situaciones: la primera, relacionada con una actuación especial del funcionario, contenida en el artículo 148*

del texto penal y, la otra de carácter común, que es la descrita en el artículo 141 del código punitivo.

En lo tocante al artículo 148 este tiene aplicación, como se sostiene en el indicado fallo, cuando “...es posible reconocer en el acto del funcionario una suficiente conexión con el legítimo sistema de vulneración de la libertad de las personas...”. El comportamiento del funcionario está relacionado con su calidad de tal en la privación de libertad de una persona. En cambio, cuando no existe esa conexión, “la acción que el funcionario realiza es la del tipo común de privación de libertad...” que castiga el artículo 141 del Código Penal.

De acuerdo a lo que se viene diciendo, para conocer si se está ante una u otra figura típica es preciso establecer en consecuencia, si el funcionario en su comportamiento actúa basado en el interés de la cosa pública y que su desempeño esté dentro de los rangos normales de privación de libertad, de modo que si no hay relación alguna entre esa actividad pública que habitualmente desarrolla con la privación de libertad de una persona, aunque se trate de un funcionario público, comete un secuestro, pues su conducta es ajena a la calidad que inviste, no está relacionada con ella, por lo que no puede ampararse en una figura más benigna.

Por otro lado, el mencionado artículo 141, en ninguna parte de la descripción del delito, señala que debe tratarse de un particular, dado que se limita a emplear la forma genérica “el que”.

Cuadragésimo: Que, tampoco la recalificación puede prosperar, atento que es dable consignar que los hechos establecidos en la causa, configuran la hipótesis penal del secuestro agravado que tipifica y sanciona el artículo 141 en sus incisos 1 y 3 del Código Penal.

El delito se cometió y se perfeccionó, una vez transcurrido los 90 días de ocurrida la detención o encierro de la víctima, independientemente de los efectos permanentes del tipo penal, debido a que se realiza “**mientras perdura la privación de libertad**” (Lecciones de Derecho Penal Chileno de Politoff, Matus y Ramírez). Y, como ya se dijo, la víctima estuvo privada de libertad desde el 27 de julio de 1974. Ahora bien, la circunstancia de que desde esa época hasta el día de hoy no se sepa del destino de la víctima y que el acusado dejó de pertenecer a la DINA hace varios años, no altera la calificación jurídica de los hechos.

Si bien es muy probable que la víctima no esté secuestrada ni viva, tampoco se puede afirmar que esté muerta, pues esos extremos se basan en suposiciones que no alcanzan para construir presunciones judiciales, en los términos de afirmar que una persona está muerta, pues si bien hay datos que se refieren a esa posibilidad, no han sido legalmente confirmados con otros antecedentes que permitan establecer dicho evento como un hecho indubitado.

A todo lo dicho, debe sumarse lo expresado en considerandos anteriores relativos a la misma alegación de recalificar el delito.

Cuadragésimo primero: *Que, en cuanto la obediencia debida, esto es, aquella actitud del inferior jerárquico o subordinado “...que piensa que cumpliendo las órdenes que recibe su comportamiento se enmarca dentro de la licitud.” (Mario Garrido Montt tomo II Derecho Penal), está considerada en el Código de Justicia Militar en el artículo 214, al disponer que “Cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable; salvo el caso de concierto previo, en que serán responsables todos los concertados”.*

Lo determinante es que exista una orden de servicio por parte de un superior, sea escrita o verbal, orden que debe ser clara y precisa en el sentido de que no quepan dudas que se ordena la realización de un ilícito determinado. Además, el inferior no debe estar en concomitancia con su superior, pues en caso de concierto anterior al delito, el inferior también es responsable del ilícito.

Nace esta exención a propósito de la obediencia debida que debe existir dentro de la jerarquía militar, que ha creado ilícitos a partir de la desobediencia, que se califican como delitos de insubordinación en el Título VII del Libro III del indicado código, del cual se desprenden los diversos requisitos que deben ser tomados en consideración al momento de revisar si hay exculpación o causal de justificación en el comportamiento del subordinado.

Las condiciones que deben darse para que opere esta eximente son: a) que la orden sea impartida por un superior; b) que ella sea relativa al servicio y c) que si la orden tiende notoriamente a la comisión de un delito, sea representada por el subalterno e insistida por el superior.

Cuadragésimo segundo: *Que, en este orden de ideas la existencia de un mandato a cumplir pasa a ser relevante y determinante en toda la*

línea argumentativa de la defensa, la que adolece de un inconveniente fáctico que transforma su tesis en un asunto puramente doctrinario, desde que falta el antecedente de hecho esencial ya aludido, cual es, que se haya dado un imperativo que se deba cumplir, aspecto sobre el cual no hay probanza alguna, ni siquiera se menciona en la declaración de este acusado, ni en la de otros, que se debía detener y encerrar a la víctima, lo cierto es que no hubo orden, en concreto, de ninguna índole que exigiera la presencia del detenido, ante alguna autoridad por algún procedimiento seguido en su contra.

Ante la ausencia de tan vital elemento, ninguna alegación puede prosperar, pues toda el andamiaje de ella se cae, resultando innecesario revisar los argumentos jurídicos que se plantean. Sin orden de un superior, no se puede hablar de obediencia debida, por mucho que en los hechos hubieren actuado diversos oficiales de distintas graduación y por ende de superiores con inferiores.

Por otra parte, la orden debe referirse al servicio y que si ella tiende notoriamente a la comisión de un delito, sea representada por el subalterno e insistida por el superior, condiciones que en caso alguno se cumplen, ya que no puede estimarse que una supuesta orden de detención y el traslado de las víctimas a un recinto clandestino, donde se interrogaba aplicando torturas, sea propia de un servicio.

Las actuaciones de seguimiento para poder detener a la víctima y la de desinformación, que fluyen de los antecedentes probatorios consignados en el apartado segundo de este fallo, solo podían ser realizada por una organización como la DINA, la que estaba a cargo, para estos efectos, del acusado, lo que permite reiterar que participó como autor en la comisión del ilícito, pues tenía elaborada una acción perfectamente coordinada para llegar a ubicar y detener a las víctimas, conducta que se replicó con otros miembros del Partido Socialista, que están desaparecidos o fueron asesinados.

Modificadorias de responsabilidad penal.

Cuadragésimo tercero: *Que, las defensas de los acusados Zapata Reyes y Krassnoff Martchenko, al contestar la acusación, invocan a favor de sus defendidos la atenuante de la media prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal, la que procede cuando ha transcurrido más de la mitad del plazo para completar la prescripción desde que ocurrió el delito, lo que se constata con un simple*

cálculo aritmético. Ella procede, si el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el plazo de prescripción de la acción penal; pero habiendo transcurrido ya la mitad de él, caso en el que el Juez debe considerar el hecho como revestido de a lo menos dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante, para luego aplicar las reglas pertinentes de regulación de la pena. El plazo de prescripción para este delito de secuestro calificado, es de diez años, según lo establecido en el artículo 94 del Código Penal, término que debe contarse desde la fecha de comisión del ilícito. Por lo que habiendo media prescripción, el tribunal deberá considerar que concurren a lo menos tres circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante y aplicar luego las normas sobre la determinación de la pena que en este caso se establecen en el artículo 68 del Código Penal, detalle que merece atención, ya que como es sabido, se discute si las rebajas que esa norma contempla, son o no facultativas del tribunal, estimando la defensa que si bien puede discutirse la situación del artículo 68 ya citado, ello es diferente cuando debe hacerse aplicación de él después de darse los requisitos del artículo 103 del Código Penal. Es así como Mario Garrido Montt, en su obra Derecho Penal, Parte General Tomo 1, de la Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición página 382, manifiesta que “La disposición tiene el carácter de imperativo para el Tribunal que debe necesariamente reducir la pena siempre que haya transcurrido como mínimo la mitad del término respectivo de la prescripción”.

Cuadragésimo cuarto: *La defensa de Krassnoff Martchenko también solicita se apliquen las atenuantes de responsabilidad criminal del artículo 103 del Código Penal, denominada también media prescripción o prescripción gradual la que es independiente de la prescripción como causal extintiva de la responsabilidad Penal.*

Cuadragésimo quinto: *Que, las referidas alegaciones no se acogen por cuanto la media prescripción, para que opere, está relacionada con el transcurso incompleto del tiempo, que requiere de una fecha de inicio para los efectos de concluir que ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción; sin embargo, al haberse concluido que el secuestro es un delito de Lesa Humanidad, que tiene por expresa disposición normativa el carácter de imprescriptible, no hay plazo alguno que contabilizar.*

*El artículo 103 del Código Penal, que contiene la minorante especial de la media prescripción, no sólo está ubicado en el mismo título de la prescripción, sino que se desarrolla a continuación de ella y tiene como sustento fáctico el transcurso del tiempo, pero además está supeditada expresamente a que no haya transcurrido el tiempo necesario para decretar la prescripción, tal como lo dispone la indicada norma al establecer que **“Si el responsable se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo transcurrido la mitad del que se exige...”**. De lo que se sigue, que necesariamente opera en delitos cuya acción sea prescriptible y que el plazo esté corriendo, pero como ya se dijo los delitos de Lesa Humanidad, por aplicación de los tratados internacionales, son imprescriptibles.*

La media prescripción o prescripción incompleta no tiene vida jurídica propia, puesto que sólo nace en el evento de que la acción sea prescriptible, de modo que si no lo es, nunca habrá plazo que contar.

Por último, existe un inconveniente práctico para llegar a la convicción de que hay media prescripción, que no es posible soslayar, cuál es, el saber desde y hasta donde se cuenta el plazo para prescribir, con la finalidad de establecer cuanto plazo faltó, si la mitad, un año, 6 meses, una semana, un día, para obtener la prescripción, datos que resultan relevantes a la hora de determinar el quantum de la pena, pues según si recién se cumplió la mitad o faltaba muy poco para prescribir, habrá motivo para rebajar uno, dos o tres grados, como lo faculta la norma.

Cuadragésimo sexto: *Que, siendo lo anterior suficiente para rechazar la concurrencia de la media prescripción, resulta que hay otro argumento que avala el rechazo respecto del delito de secuestro acreditado en la causa. En efecto, este ilícito tiene el carácter de permanente hasta mientras no aparezca la víctima; de otro lado, la prescripción no empieza a correr sino una vez que ha cesado la duración de su estado consumativo, por lo que mientras se prolongue tal situación, no es posible indicar en qué momento comienza el cómputo a que se refiere el artículo 95 del texto punitivo, por consiguiente, tampoco se puede dar inicio a la situación regulada en el artículo 103 del mismo código; en conclusión, si no empieza a correr el plazo, no hay*

prescripción posible y tampoco media o incompleta, pues esta última no tiene vida independiente y autónoma de la primera.

La media prescripción es una consecuencia de no alcanzar el tiempo exigido para que opere la prescripción, por lo que tiene una vital dependencia de esta, de modo que si no ha comenzado a correr, no puede tener reconocimiento jurídico.

Cuadragésimo séptimo: *Que, la defensa del encartado Miguel Krassnoff Martchenko, alega a su favor la atenuante de responsabilidad criminal de cumplimiento de órdenes prevista en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, en atención a que el actuar, para proceder a la supuesta detención, proviene de una orden emanada de un superior jerárquico, habida consideración que Krassnoff a la época de los hechos era un modesto teniente (oficial subalterno) cuya orden no podía discutirla ni cuestionarla, en la verticalidad de mando que opera en las Instituciones Armadas, y que evidentemente era relativa al servicio.*

La defensa de Basclay Zapata Reyes también plantea como circunstancia atenuante el cumplimiento de órdenes, ya que su representado se encontraba a la época de los hechos en comisión de servicios en la DINA, bajo el mando directo de un Oficial de Ejército, de mayor antigüedad de quien debía cumplir las órdenes impartidas por lo que lo favorece la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, la que solicita también sea considerada como muy calificada. Lo anterior en atención a que su representado reconoce haber cumplido las ordenes de sus mandos superiores. Respecto a la atenuante contemplada en el inciso final del artículo 214 del Código de Justicia Militar, señala que la norma del artículo mencionado en su inciso 2° establece “El inferior que, fuera del caso de excepción a que se refiere la parte final del inciso anterior, se hubiere excedido en su ejecución, o si, tendiendo la orden notoriamente a la perpetración de un delito, no hubiere cumplido con la formalidad el artículo 335, será castigado con la pena inferior en un grado a la asignada por la ley al delito”. Norma que regula uno de los efectos de la obediencia jerárquica y se coloca en el caso que un inferior comete delito en cumplimiento de una orden, sin haberla representado. Expresa que como requisitos para atenuar la pena según la norma citada deberá establecerse que exista una orden de un superior; en el caso de autos su representado reconoce el cumplimiento de órdenes y el Tribunal está acusando a todos sus mandos superiores, por lo que no cabe dudas

que su actuación se hizo dentro de los márgenes de una orden superior; que dicha orden tienda notoriamente a la comisión de un ilícito; y que no se haya dado cumplimiento con la representación y en consecuencia con la insistencia.

La defensa de Krassnoff Martchenko también alega a favor de su representado la circunstancia atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, como muy calificada, en atención que el actuar de él proviene de una orden emanada de un superior jerárquico, habida consideración de que Miguel Krassnoff Martchenko a la época, de los hechos tenía el grado de teniente (oficial subalterno), orden militar, la cual es susceptible de ser discutida o cuestionada en la verticalidad del mando que opera en las instituciones armadas.

Cuadragésimo octavo: *Que, sobre esta materia, es preciso consignar que el artículo 211 del Código de Justicia Militar dispone: “Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214 será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico...”.*

Del contenido de dicha norma se colige que el aspecto central y esencial de la minorante es que se obre en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico, es decir, en los hechos se debe demostrar que hay una orden que justifique el acto y que ella emana de un superior jerárquico, ninguno de los dos extremos fue acreditado en la causa, ya que en sus diversos testimonios, los acusados no mencionan alguna orden de un superior jerárquico, tampoco se acreditó la existencia de alguna orden administrativa y/o judicial o que se hubiere dictado alguna resolución que involucre a la víctima de autos, razón por la cual le atenuante se rechaza.

Esta atenuante exige, al menos que los acusados reconozcan su proceder y, al negar no solo toda participación en el secuestro de Joel Huaiquiñir Benavides, sino que también que estuvieron físicamente en los cuarteles de Londres 38 y Cuatro Álamos interrogando y torturando detenidos, resulta incompatible, pues no se sabe a qué ordenes específicas hacen mención las defensas, si en definitiva sus defendidos niegan haber actuado ni menciona alguna orden en concreto para proceder de la forma en que concluyó el tribunal.

Cuando se emplea las palabras “...el cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico...”, el legislador hace una clara alusión a los partícipes confesos de un hecho con características delictuales, también exige que se acredite que se impartió una orden, sea verbal o por escrito, de un superior jerárquico, antecedente fáctico que tampoco está demostrado.

Cuadragésimo nono: *Que, también se invoca, en favor de los acusados Zapata Reyes y Krasnoff Martchenko, la atenuante establecida en el inciso segundo del artículo 214 del Código de Justicia Militar, toda vez que en el ilícito materia de la acusación se da justamente lo previsto en la segunda parte de la norma y, si bien los acusados han negado su participación en los hechos, se han desestimado dichas alegaciones, procesando y acusando como autores del delito a toda la cadena de mando del organismo, por lo que en la hipótesis desarrollada por este juez, deriva del cumplimiento de una orden que tendía notoriamente a la perpetración de un delito.*

El artículo 214 del citado texto de Justicia Militar señala: “Cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable; salvo el caso de concierto previo, en que serán responsables todos los concertados. El inferior que, fuera del caso de excepción a que se refiere la parte final del inciso anterior se hubiere excedido en su ejecución, o sí, tendiendo la orden notoriamente a la perpetración de un delito, no hubiere cumplido con la formalidad del artículo 335, será castigado con la pena inferior en un grado a la asignada por la ley al delito”.

De lo dicho aparece como un requisito esencial para que se configure esta hipótesis, es que haya un reconocimiento efectivo por parte del acusado que detuvo a la víctima, que la encerró y que participó activa o pasivamente en su interrogatorio, lo que no ha sucedido, toda vez que Krassnoff no sólo niega haber practicado la detención de la víctima, sino que desconoce haber estado, como agente operativo e interrogador, en el recinto donde fue encerrada la víctima, por lo que mal pueden haber obrado en virtud de órdenes de un superior jerárquico, tal como se ha dejado establecido en motivos anteriores.

Cabe señalar que la invocación de la minorante ha sido muy escueta y sucinta, sólo la mencionan, sin entregar detalles de la forma en

que se demostraría su concurrencia. La circunstancia que este sentenciador esté rechazando la petición de absolución y establezca, por medio de presunciones la participación del acusado, no supera el escollo de la incompatibilidad que hay entre declarar sobre hechos aparentemente lícitos e inocuos y reclamar de una atenuante que per se exige un reconocimiento de haber obrado en virtud de una orden de un superior determinado, lo que hace que esta petición también se rechace.

Por último, la tibia referencia que hacen Zapata Reyes y Krassnoff Martchenko a que en alguna oportunidad estuvieron en el cuartel de Londres 38, no tienen por objeto reconocer actividad alguna en ese recinto, si no que claramente obedece a tratar de justificar el peso de las imputaciones que se les hiciera por distintos testigos.

Quincuagésimo: Que, por último, se invoca a favor del acusado Krassnoff Martchenko la atenuante de la irreprochable conducta anterior, basado en que en su extracto de filiación y antecedentes carece de anotaciones penales anteriores y su conducta por lo tanto ha sido ejemplar e intachable.

También la defensa de Zapata Reyes plantea la irreprochable conducta anterior, ya que constaría del Extracto de Filiación y Antecedentes que su representado no tiene antecedentes anteriores, y tampoco posteriores, siendo en consecuencia su conducta ejemplar e intachable, por lo que debe considerarse la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, la que solicita se considere como muy calificada.

La defensa de Zapata Reyes indica que su conducta por lo tanto ha sido ejemplar e intachable, por lo que debe aplicársele la atenuante del artículo 11 N° 6, del Código Penal. Finalmente plantea que es necesario efectuar una determinación de la pena, ya que al respecto el Código Penal en su artículo 141 vigente a la época de los hechos establece la penalidad del delito de Secuestro con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados y atendida la concurrencia de las circunstancias atenuantes, e inexistencia de circunstancias agravantes de autos, se debe remitir a lo contemplado por el artículo 68 inciso 3° del Código Penal en que el Tribunal podrá rebajar la pena hasta en tres grados, esto es, de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y considerando que existen circunstancias atenuantes muy calificadas aplicar una pena que va desde 61 días a 540 días de prisión en su grado mínimo.

Quincuagésimo primero: Que, la atenuante alegada del artículo 11 N° 6 del Código Penal dispone: “**Si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable**”. Al respecto, es dable consignar que la conducta pretérita anterior no sólo debe ser irreprochable en el ámbito penal, sino que al no restringirla a dicho aspecto la disposición normativa, la conducta pasada también está referida a otros ámbitos del comportamiento humano, como es el social, laboral, familiar, etc., aspectos sobre los cuales no hay antecedentes en la causa, por lo que no puede beneficiarle una minorante, basado en que formalmente sus extractos penales, aparecen sin anotaciones anteriores a los hechos investigados.

No se puede presumir que por el solo hecho de que el extracto de filiación no registre anotaciones penales anteriores a la presente causa, la conducta pasada sea ejemplar e intachable, esto es exenta de todo reproche en términos de sostener que su pasado tiene las indicadas cualidades, tal documento únicamente indica que no se ha tenido una conducta criminal constatada por una investigación de ese orden.

Aspecto que en concepto de este sentenciador resulta insuficiente, ya que no hay en el proceso, como se dijo en el acápite anterior, ningún otro dato objetivo sobre el comportamiento pretérito de los acusados en otros ámbitos de su actuar, sea en el orden laboral, social, familiar, ya que restringir la atenuante exclusivamente al ámbito penal, con sentencias ejecutoriadas, es aplicar la norma a un aspecto excepcional en la vida ciudadana, pues lo normal es no delinquir, ni menos tener la calidad de condenado.

Quincuagésimo segundo: Que, finalmente la defensa de Miguel Krassnoff Martchenko, señala que le favorecería la eximente incompleta del artículo 10 N° 10, en relación con el artículo 11 N° 1, ambos del Código Penal, alegación que se desestima de plano, toda vez que no se explica la manera en que ella se configuraría y, en todo caso, en el proceso no hay ningún dato invocado por este acusado en que insinúe que actuó en virtud del cumplimiento de un deber, desde que niega toda actividad ilícita.

Penalidad.

Quincuagésimo tercero: Que, en cuanto a la penalidad, la defensa de Basclay Zapata Reyes señala que el artículo 141 del Código Penal, establece que los delitos por el cual se acusa a sus representados tiene

una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Entendida la concurrencia de las circunstancias atenuantes invocadas y la inexistencia de circunstancias agravantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, inciso 3°, del Código Penal, el Tribunal puede rebajar la pena en tres grados, a partir del mínimo de la pena asignada al delito, y considerando que las atenuantes invocadas son muy calificadas, pide aplicar una pena mínima acorde con la recalificación que debe efectuarse del delito.

La defensa de Krassnoff Martchenko plantea en cuanto a la penalidad del delito y atendida la concurrencia de las circunstancias atenuantes e inexistencia de circunstancias agravantes de autos, deberá luego el sentenciador remitirse a lo contemplado en el artículo 68, inciso 3°, del Código Penal, por lo que se podrá rebajar la pena hasta en tres grados, debiendo ser favorecido con la institución de la remisión condicional de la pena y que respecto a Joel Huaiquiñir Benavides se estaría en presencia de una infracción al artículo 148 del Código de Procedimiento Penal, esto es el delito de detención ilegal, correspondiendo aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo, sin perjuicio de que esta deberá disminuirse a la pena de prisión en su grado máximo, en atención a la concurrencia de más de dos circunstancias atenuantes muy calificadas.

Quincuagésimo cuarto: *Que, al no existir circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que considerar respecto de Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes, y siendo los acusados responsables de un delito sancionado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, se puede recorrer en toda su extensión la pena asignada al delito, de conformidad a lo previsto en el inciso primero del artículo 68 del Código Penal, por lo que se puede decidir libremente la pena a imponer en toda su extensión, esto es, de los cinco años y un día a los veinte años.*

Por consiguiente, para establecer el quantum final de la pena, se tendrá en consideración el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho, lo que debe mitigar la severidad de la pena probable a aplicar y la pena justa, atendida la gravedad de los hechos, el amparo por parte del Estado que los acusados tuvieron por tanto tiempo, los fines de la pena y la extensión del mal producido como lo contempla el artículo 69

del texto penal; factores que en definitiva llevan a optar por el grado mínimo, pero en su parte más alta.

En cuanto a la acción civil.

Quincuagésimo quinto: *Que, en el primer otrosí del escrito de foja 1000 los abogados Boris Paredes Bustos y Magdalena Garcés Fuentes, en representación de María Haydee Collantes Urbina, Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, deducen demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado.*

La referida acción se funda en el delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides, cuyos hechos están consignados en la acusación judicial, de la que aparece que Huaiquiñir Benavides en el año 1974 era militante del Partido Socialista de Chile y miembro del Comité Central de dicho conglomerado político, quien el día 27 de julio de 1974 fue detenido en el domicilio de Guillermo Naveas Gramattico por agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo llevado al cuartel clandestino de detención ubicado en calle Londres 38, lugar donde fue torturado, siendo visto en dicho recinto por otras personas que también estaban en calidad de detenidas. El indicado Huaiquiñir Benavides era constantemente interrogado bajo torturas y trasladado a lugares fuera del recinto, entre otros a Villa Grimaldi, ya que durante el año 1973 se había desempeñado como dirigente sindical en el Mineral El Salvador. Regresó al cuartel de calle Londres 38 donde estuvo hasta la última semana del mes de agosto del año 1974, fecha en que es trasladado a Cuatro Álamos, que era utilizado como recinto de detención y torturas por agentes de dicha organización, donde también fue visto por otros detenidos y se le mantuvo privado de libertad hasta el mes de agosto de 1974, desconociéndose desde esa fecha su paradero.

Añade que el secuestro calificado, además de sus consecuencias penales, genera efectos civiles, consistentes en la obligación de reparar a las víctimas y a sus familiares, responsabilidad civil que recae solidariamente sobre los autores del ilícito y sobre el Estado de Chile, ya que los agentes que perpetraron el delito, eran agentes del Estado. Los demandantes fundan su pretensión en el hecho de que se encuentra acreditado, en autos, que el ilícito fue perpetrado por agentes del Estado, específicamente por funcionarios del Ejército y Gendarmería, que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional en importantes

roles de mando en dicho organismo (a excepción de Basclay Zapata que era Cabo), quienes actuaron dentro de una política sistemática de violación de derechos humanos implementada por el gobierno de la época en contra de sus adversarios políticos, en la cual la detención y posterior desaparición y/o ejecución de personas, sin perjuicio de otros crímenes, constituyeron una práctica habitual. El secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides, se llevó a cabo lejos de toda legalidad y los hechos actuaron siempre amparados por el gobierno de facto y haciendo una serie de maniobras que tendían a ocultar la perpetración de los ilícitos.

Señala que el Estado de Chile ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ("Comisión Rettig"), Volumen I, Tomo 2, página 840, de la reedición de 1996, en la que establece: "El 27 de julio de 1974, fue detenido un miembro del Comité Central del PS, en el norte. Se trata de Joel Huaiquiñir Benavides, de 28 años. Fue conducido a Santiago y se le vio en diversos lugares de detención, entre ellos Londres 38 y Cuatro Álamos. Un periódico de la capital se refirió públicamente a su detención, relacionándola a la existencia supuesta de armas en el norte. El Ministro del Interior de ese momento reconoció la aprehensión y agregó en oficio dirigido al Tribunal que conocía el amparo en su favor, que se encontraba "detenido en cumplimiento a lo que ordena el Decreto Exento N° 285". Unos días después sostuvo que mediante otro Decreto Exento, el N° 414 que "se encuentra en libertad". Sin embargo, luego de la permanencia de Joel Huaiquiñir en Cuatro Álamos se perdió todo rastro de él. La Comisión "está convencida de que su desaparición fue obra de los agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos".

En cuanto al daño producido dice que como consecuencia directa del secuestro calificado de sus respectivos esposo y padre, los demandantes han sufrido un profundo daño moral, que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo y la pérdida de un ser querido siempre es un hecho doloroso, pero lo es más cuando es producto de una violencia irracional, aplicada tal cual ocurre con este tipo de situaciones, como un castigo a quienes eran adherentes del gobierno de la Unidad Popular, identificados como enemigos internos por los servicios de inteligencia. La forma alevosa y con ensañamiento en que Joel Huaiquiñir Benavides fue secuestrado, torturado, asesinado y hecho

desaparecer; el impedir que se realizara tanto el velorio como el entierro digno de su cuerpo, así como el no poder expresar ni compartir el dolor; la impunidad de los autores, la imposibilidad durante muchos años de acceder a la justicia ya que el Estado utilizó a su arbitrio distintos medios para impedir que se acreditara legalmente la verdad de lo sucedido, la violenta e irrecuperable ruptura de los lazos afectivos y el efecto traumático de la misma, son algunas de las situaciones que han significado un dolor permanente a los actores.

Añade que Joel Huaiquiñir Benavides, era integrante del Comité Central de la juventud Socialista de Chile hasta el golpe de Estado, fecha en que asume tareas partidarias en la clandestinidad. Tenía 28 años al momento de su secuestro, estaba casado y tenía dos hijos. Hasta el 11 de septiembre de 1973 era instructor en materias de seguridad en el Mineral El Salvador. Debido a la persecución desatada en contra de los funcionarios públicos adherentes del gobierno de la Unidad Popular, debió retornar con su familia a Santiago.

Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, 45 años, actor, hermano de Joel Huaiquiñir Collantes, describe los daños que la detención y posterior desaparición forzada de Joel Huaiquiñir Benavides (esposo y padre), produjeron y siguen produciendo en la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Señala que a la fecha del golpe de Estado de 1973, la familia afectada estaba compuesta por María Urbina Orellana, abuela materna; María Haydee Collantes Urbina, madre y esposa, de 25 años; Joel Huaiquiñir Benavides, padre y esposo, de 27 años; Joel Antonio Huaiquiñir Collantes, hijo y hermano, de 4 años; y el Vladimir Huaiquiñir Collantes, hijo y hermano de 3 años. Los primeros recuerdos que tiene sobre su padre son de un tipo alegre, gracioso y atento a tirar la talla con cualquier cosa, logrando su objetivo. El encuentro con su padre después del trabajo era siempre de alegría. Recuerda que por el hecho de que su padre trabajaba como instructor de seguridad industrial en el Mineral El Salvador de Codelco, su madre viajaba periódicamente al campamento que tenía unas habitaciones que permitían recibir a la familia, en ocasiones viajaba con él, y en otras con su hermano. Su padre, a la fecha de la detención, era el único sustento familiar. Tras ser detenido por el denominado Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM) de Chile, 8 días después es llevado hasta la casa familiar, en ese momento su madre se encontraba realizando diligencias en diversos organismos

como Comité Pro Paz, el SENDET, Cárcel Pública, Ministerio de Defensa, Cuatro Álamos, etc. Es en estas circunstancias, que al domicilio familiar llega un auto desde el que salen dos o tres sujetos que irrumpieron en la casa, sin decir palabras que no fuera para exigir o prohibir algo, querían la mejor ropa que tenía su padre y las frazadas mejores, sacaron lo que querían y al salir hacia el auto, uno de ellos abre la puerta del asiento trasero y luego toma por las axilas a su hermano de 5 años y lo pone en el interior diciendo "Ya, despídanse del papito", inmediatamente saca a su hermano y lo toma a él y hace lo mismo. En ese momento vio que en el suelo del asiento trasero del auto estaba su padre herido y con alambres amarrando sus manos, le dio un beso en su barba, mientras era sacado del auto los tipos sonreían en silencio y tras subirse al auto se van. Desde la detención de su padre en adelante vinieron escenas de su estado en cautiverio en sueños, de su madre, hermano y propia. En todos los sueños estaba la espera y la llegada de vuelta de su padre. La familia de su madre escuchaba y la consolaba, con el paso de los años el tema fue perdiendo relevancia, excepto para el núcleo familiar. Por otra parte, la familia Huaiquiñir se desligó del caso, resignándose, sin iniciar su búsqueda. En definitiva, ambas familias se destruyeron, el contacto con unos se volvió nulo y con otros sin interacción, poniéndose por delante la necesidad imperiosa de olvidar y ni si quiera nombrar el tema, de manera que el silencio, el olvido y lo oculto se volvió natural. En este contexto, su madre seguía la búsqueda, que resultaba contraproducente con olvidar una especie de exigencia tácita de "poner la otra mejilla, agachar el moño". Tras la detención del padre de la familia, la madre se vio en la necesidad de trabajar en lo que fuera. Es así que trabajó como empleada en algunas casas, entre las cuales se repetía la escena de los patrones hablando acerca de los militares y lo bien que le habían hecho al país, Entre los momentos más iconográficos, la madre siempre recuerda la burla y especie de asco de un Juez cuando ella fue llamada al tribunal, este le decía que su esposo era un delincuente, que todo lo que decía era mentira, sin dejarla hablar. En una ocasión en el SENDET un oficial le muestra a su madre un decreto de libertad (secreto, según lo dicho por el militar), en que decía que su esposo estaba libre por falta de méritos en su contra y que se fuera para su casa tranquila porque él volvería en cualquier momento. En torno a esta misma ocasión su madre se entera por familiares de otros detenidos, que confirmaban lo dicho

por uno de los guardias, que su esposo habría sido llevado "al sur", conocida forma entre guardias y detenidos, de decir que habría sido lanzado al mar. Su madre nunca pudo rehacer su vida con otra persona, otra pareja, y no fue por falta de pretendientes. Su optimismo y proyección de vida feliz desaparecieron con su esposo. La sensación de espera permanente está vigente y vive aún el día de hoy la idea del regreso de su padre. La vida social de la familia, se centró estrictamente en la casa y en la iglesia evangélica, grupo religioso a los que su madre se avocó. Su madre empezó a trabajar haciendo aseo, trabajó en costura en casa con una máquina que el padre de familia le había regalado, luego encontró trabajo que la tenía fuera de casa y alejada de ellos durante casi todo el día. Trabajaba en un cuarto pequeño de una casa y en una tienda de ropa a las que eventualmente nos tenía que llevar. En básica recibieron los apodos por no salir más que con la madre y por no tener más referencias que de ella y principalmente por no poder dar respuesta acerca de la existencia de su padre, personaje muy importante cuando se trata de hacerte respetar, sobretodo en la población, y en el colegio de la población. Las agresiones respecto de la calidad de su padre como persona y el destino que tuviera, los afectaba profundamente. Los agobiaba el colegio, el menosprecio, la sensación de indefensión, en la necesidad de saber para defender al padre y a la madre. Solicitó a su madre que lo cambiara de escuela, y pudiese empezar de nuevo en otro colegio. Al llegar a la enseñanza media empezaron a escuchar comentarios muy inhumanos respecto del 11 de septiembre del 73. Los asesinatos se naturalizaron y las proyecciones de un joven de población en esa época contemplaban siempre el servicio militar donde podían hacer carrera. Algunos compañeros no creían lo de la detención y posterior desaparición del padre, otros tal vez sí pero callaban, otros se reían y no les importaba, otros sabían y contaban historias del amigo del tío que participó en tipos de torturas y mató comunistas y que ser boina negra era lo mejor, y que los desaparecidos bien desaparecidos están. La rabia, la indignidad, las humillaciones permanentes se hicieron más grandes, más visibles. El terror se hizo un gran espacio en sus vidas y no se fue más. De acuerdo a los testimonios relatados, los daños sufridos y sin necesidad de mayores explicaciones, estiman que el daño moral sufrido debe ser avaluado en una cantidad no inferior a los

\$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada una de los demandantes.

En cuanto a los fundamentos de derecho de la acción se refiere a la competencia de este Tribunal para conocer de la demanda civil, aspecto en que no se ahondará dado que la demandada civil no la objetó.

En lo tocante a la responsabilidad de los acusados ella está en el artículo 2314 del Código Civil, que establece que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro debe indemnizar; los acusados como autores o cómplices del delito eran agentes del Estado, por lo que en consecuencia el Estado debe también reparar el daño que ha causado.

En lo que concierne a la responsabilidad del Estado manifiesta que hay un principio general en derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no están obligadas a soportarlos, lo que tiene como consecuencia que cada sujeto que se sienta agraviado o lesionado por actos de los órganos públicos puede demandar ante los Tribunales de Justicia el resarcimiento de los perjuicios conforme al estado de derecho democrático. A la luz de la Constitución de 1925 son los artículos 4, que establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse en las facultades que les entrega la ley y los actos que se excedan son nulos; también se basa en los artículos 10 N° 1 y 9 de la Constitución de 1925, que consagran el derecho de propiedad, sin distinción alguna y la igual repartición de las cargas públicas. Todo daño producto del actuar de algún Órgano del Estado, como lo es el Ejército de Chile, constituye un desmejoramiento de la esfera patrimonial de los sujetos afectados y genera, el derecho a exigir la responsabilidad del Estado, toda vez que estamos ante una lesión al derecho de propiedad. A su turno, el N° 9, aseguraba la igual repartición de las cargas públicas, que obliga a indemnizar a todo aquel que infringe un daño, pues ello implica una ruptura de la igual repartición de las cargas públicas.

Luego analiza la responsabilidad del Estado en el Derecho Administrativo actual, ya que sus reglas rigen in actum y, el artículo 38 inciso 2 de la Constitución Política de la República dispone que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado puede reclamar ante los Tribunales de Justicia, con lo que

establece un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema de carácter directo, haciéndose efectiva en el patrimonio fiscal. También el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración hace responsable al Estado de los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones.

Enseguida, la demandante se refiere a la imprescriptibilidad de la acción incoada por tratarse de normas de derecho público que no se rigen por las normas privadas del Código Civil. También se refiere a la naturaleza de la Responsabilidad del Estado, que emana del derecho público y ella no requiere ni precisa el dolo o la culpa, su procedencia se origina exclusivamente porque el actuar de un órgano del Estado causa un daño que la víctima no está obligado a soportar.

Se hace mención a la obligación de reparar en el Derecho Internacional y analiza la procedencia de la indemnización por daño moral, de conformidad a las normas de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, pues toda persona que alega que el perjuicio causado a un tercero le lesiona directamente a ella, puede iniciar una acción de reparación por el daño que le provocó tal situación, incluso se ha fallado que en el caso de parientes próximos no es necesario probar el perjuicio, el que se presume. De modo que la procedencia del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional.

Explica, finalmente, que en este caso se dan todos los requisitos que obligan al estado a indemnizar los perjuicios causados, pues existe el daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito; la acción u omisión emanó de un órgano del Estado, la DINA que es responsable de los secuestros de las víctimas, hay nexo causal entre daño y delito y no hay causales que eximan al Estado de su responsabilidad.

Solicita se acoja demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, declarando que el demandado deberá pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por el secuestro calificado de Joel Huaiquini Benavides, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago total y efectivo de las mismas, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Quincuagésimo sexto: Que, el Consejo de Defensa del Estado en foja 1063, al contestar la demanda civil antes señalada, alega la excepción de pago, improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizados los demandantes María Haydee Collantes Urbina, Joel Ernesto Hauaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaqiquiñir Collantes, explica que la reparación por infracción a los Derechos Humanos no es posible comprenderla si no se posicionan correctamente en el panorama jurídico nacional e internacional; comprensión que sólo puede efectuarse desde el ámbito de la llamada “justicia Transicional”. El dilema “justicia versus Paz”, es el pilar sobre el cual descansa esa justicia. Argumentos en favor de amnistías generales que aporten a la necesaria tranquilidad de un país, debe lidiar con la necesidad de que una sociedad reconozca los errores del pasado para que se produzca el “nunca más”. Por ello, las transiciones han sido medidas mediante las cuales determinadas sociedades, en momentos históricos específicos definen la proporción de sacrificio de los bienes en juego. La reparación de los daños sufridos por las víctimas, juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia tantos años buscada. En ese sentido, las negociaciones entre las víctimas y el Estado revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos más específicos. Concurso de intereses que se aprecia en la diversidad de contenidos que se proponen como programas de reparación, los que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas a la simple entrega de una suma de dinero, por ello las transiciones se basan en complejas negociaciones. Manifiesta que el gobierno del Presidente Aylwin se abocó, en lo que respecta a la justicia transicional, a tres puntos; uno de ellos, la provisión de reparaciones para los afectados. Todo lo cual se concretó en la dictación de la ley 19.123, complementada por la ley 19.980, que tenían objeto indemnizatorio, en virtud de las cuales la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se han realizado principalmente por medio de 3 tipos de compensaciones: a) transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y c) reparaciones simbólicas.

Quincuagésimo séptimo: Que, en relación con la reparación mediante transferencias directas de dinero, señala que la Ley 19.123 estableció una pensión vitalicia para el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre, cuando aquella falte o renuncie, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años de edad, o discapacitados de cualquier edad; y, en una primera etapa ella ascendió a \$140.000.-, pero por medio de la ley 19.980 dicho monto se incrementó, a contar del 1 de diciembre de 2004, en un 50%, a lo que debe agregarse el porcentaje equivalente a la cotización de salud. A continuación, el Fisco proporciona las cifras globales que el Estado ha entregado por concepto de pensiones, bonos, desahucio. Además, dice que una pensión mensual es una forma de reparar el perjuicio actual; también se entregó a los familiares de las víctimas una bonificación compensatoria de un monto único, equivalente a doce meses de pensión, un bono de reparación de \$ 10.000.000. para los hijos del causante que nunca recibieron pensión mensual de reparación. También invoca que, ha habido reparación mediante la asignación de nuevos derechos, que fueron incorporados por la ley 19.123, entre ellos, prestaciones médicas gratuitas, a través del programa PRAIS, esta gratuidad comprende todas las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud de la red Asistencial Pública; los hijos de los causantes que sean alumnos de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, sin aporte fiscal, tienen derecho al pago de matrícula y del total del arancel mensual.

También están las reparaciones simbólicas, que es una forma de reparación del daño moral, por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron motivo a las violaciones, no hay una satisfacción por medio de dinero, pero si son actos que tiene por objetivo, reparar en parte el dolor y la tristeza actual, reduciendo el daño moral, como lo son la construcción de memoriales, museo de la memoria, establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, Premio Nacional de Derechos Humanos.

Plantea que los esfuerzos del Estado, para reparar a las víctimas de los DD.HH., han cumplido con todos los estándares internacionales, lo que ha sido reconocido por la Excm. Corte Suprema en los fallos que transcribe, en lo pertinente.

Quincuagésimo octavo: Que, en cuanto a toda la argumentación que entrega el Fisco de Chile sobre la Justicia Transicional, los recursos limitados del Estado y las diferentes medidas que se han tomado para reparar los daños sufridos por los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, no puede ser atendida, ya que las acciones indemnizatorias deducidas en contra del Fisco de Chile, tienen su origen en la perpetración de un delito de Lesa Humanidad, cometido por agentes del Estado, en que se persigue la responsabilidad pecuniaria de este último, en virtud de la responsabilidad legal o extracontractual del Estado establecida en la Constitución Política y normada en la responsabilidad estatal por actuaciones de sus agentes, cuando se han violado los derechos humanos de los ciudadanos que viven en ese Estado, y que tiene por objetivo la satisfacción material del daño moral sufrido por los familiares de aquellas víctimas, acción civil que no establece orden de preferencia alguna, sin que la actuación de alguno de los que invoca perjuicio clausure la posibilidad de demandar que tienen o puedan tener otros que también se sientan perjudicados. Y, la única limitante que tienen quienes reclaman un daño moral sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado, es de orden probatoria, ya que se debe demostrar la existencia de dicho daño, pero este aspecto es una cuestión de naturaleza procesal, que tiene que ver con el fondo de la pretensión, de manera que formalmente basta con alegar la existencia del daño y la relación, sea de parentesco o de amistad, con la víctima para plantear su libelo. La acción civil de indemnización de perjuicios, no tiene restricción en cuanto al titular de aquella, alcanzando a todo aquel que sienta que ha sufrido un perjuicio y que lo demuestre en juicio, por lo cual, no obsta a que cualquier persona relacionada con las víctimas, deduzca acción civil indemnizatoria por daño moral.

A mayor abundamiento, el hecho de no encontrarse establecido como beneficiario directo en la Ley 19.123, no es argumento suficiente para deslegitimar su acción, toda vez, que dicha ley tenía y tiene por objeto la reparación, otorgando beneficios para los familiares, entre los que figuran: pensión de reparación para los familiares directos, beneficios médicos, subsidios educacionales para los hijos, exención del Servicio Militar Obligatorio entre otros; pero de ninguna manera inhibe la interposición de las acciones civiles correspondientes, reclamando únicamente, una suma de dinero determinado

Quincuagésimo nono: Que, en todo caso, no se acogerá la excepción de pago, toda vez que este modo de extinguir las obligaciones consiste, de conformidad con lo previsto en el artículo 1568 del Código Civil, en “...la prestación de lo que se debe”, esto es, debe existir una obligación previa que cumplir, lo que no ocurre en la especie, pues recién con la dictación de la presente sentencia, se está reconociendo la obligación del Estado de responder pecuniariamente por el daño moral sufrido por la cónyuge e hijos de la víctima Joel Huaiquiñir Benavides, causado por el actuar ilícito de agentes del Estado, no existiendo prueba alguna que demuestre la solución anticipada de esta deuda, carga procesal que le correspondía a la demandada civil.

Por otra parte, la indemnización reclamada no puede circunscribirse a los beneficiarios de la ley 19.123, atento que el Estado de Chile, por medio de esa normativa desplegó un conjunto de acciones y medidas tendientes a reparar los daños morales y materiales causados por graves violaciones a los derechos humanos acaecidos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, respecto de determinadas personas, lo que no significa restringir los beneficios a los indicados en ese cuerpo legal, desde que clara y expresamente queda fuera el pago de suma alguna, como reparación por concepto de daño moral, materia sobre la cual, cualquier persona, acreditando los requisitos exigidos por la ley, puede accionar contra el Estado.

En dicho texto normativo, si bien se habla de promover la reparación por concepto de daño moral, en definitiva, no se reguló forma de compensación por dicho ítem, ya que se limitó a establecer, que el Órgano que crea, inste por promover la reparación del daño moral, pero ello no se concretó en pago alguno.

La circunstancia de que la demandante María Haydee Collantes Urbina, perciba mensualmente desde el 01 de julio de 1991 la suma que se precisa en el documento de foja 1313 y que los demandantes Joel y Vladimir Huaiquiñir Collantes hubiesen percibido las sumas señaladas en los documentos de foja 1315 y 1316, no obstan al reclamo indemnizatorio, toda vez, que dichas cantidades han sido recibidas como pensiones, dentro del marco de la Ley 19.123, que como se concluye más adelante, tienen un fin y una naturaleza diversa al daño moral. Aquellas cubren daños materiales, en cambio, por la acción en análisis, se pretende cubrir los padecimientos íntimos de cada uno de los familiares

de una víctima, en este caso concreto, el sufrimiento de la cónyuge e hijos de la víctima.

Por último, cabe consignar que la excepción denominada reparación satisfactiva, involucra en el fondo, las formas de extinción de obligaciones de pago y compensación, toda vez, que se pretende que las actoras están cubiertas en su reclamo indemnizatorio, por el conjunto de reparaciones no económicas que se detallan en la contestación, lo que por cierto resulta inaceptable.

En cuanto al pago, se reitera lo ya dicho y, en lo que respecta a la compensación, como modo de extinguir las obligaciones, se produce cuando dos personas son deudoras recíprocamente, en este caso, las demandantes nada adeudan al Fisco de Chile.

Sexagésimo: *Que, el Consejo de Defensa del Estado también invoca respecto de las demandas civiles aludidas en párrafos anteriores, la excepción de prescripción de la acción civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto. Indica que la detención de la víctima Joel Huaiquiñir Benavides, ocurrió el día 24 de julio de 1974, de lo que resulta que aún entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales ante los tribunales de justicia hasta la restauración de la democracia, o hasta la entrega del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de las demandas, esto es, el 31 de julio de 2015, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil. En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años a que se refiere el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del mismo Código, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y a la fecha de notificación de la demanda, también ha transcurrido con creces el plazo legal.*

Sostiene que las reglas relativas de prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado y se trata de una institución de aplicación universal en todo el ámbito jurídico y de orden público por lo que no cabe renunciarla anticipadamente y la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad, esto es, resarcir un perjuicio por lo que le son

aplicables las reglas de extinción. Por otro lado, los principios generales de legalidad y responsabilidad de los actos de los órganos del Estado, consagrados en la Carta Fundamental, no establecen la imprescriptibilidad y por el contrario se remiten a las normas legales que no son otras que las normas generales del Código Civil. La imprescriptibilidad es excepcional, por lo que requiere declaración explícita y ella no existe. Además, afirma que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política del Estado o los Tratados Internacionales y la regulación del Código Civil, pues no hay norma que prohíba la prescripción de acciones civiles. Al efecto, cita numerosos fallos, transcribiendo sus fundamentos que acogen la tesis de la alegada prescripción. Añade que la normativa constitucional invocada en la demanda no corresponde ya que se ha ejercido una acción de responsabilidad extracontractual del Estado por hechos acontecidos en el año 1974, lo que hace inaplicable la Constitución Política de la República y la Ley de Bases de la Administración, desde que ellas entraron en vigencia con posterioridad al hecho ilícito que les sirve de antecedente para reclamar.

También señala que la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial y no de carácter sancionatorio, por lo que no debe cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial, por lo que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla está expuesta a extinguirse por prescripción.

Finalmente, respecto de las normas contenidas en tratados internacionales, no hay disposición alguna que establezca la imprescriptibilidad de la acción entablada contra el Fisco, lo que también ha sido resuelto favorablemente por la Excma. Corte Suprema, de acuerdo al fallo que transcribe, en lo pertinente.

Sexagésimo primero: *Que, la indicada excepción se rechaza teniendo en consideración para tal efecto lo consignado en la sentencia de reemplazo del fallo de casación de 22 de noviembre de 2012, dictada por la Excma. Corte Suprema en el ingreso Rol N° 3573-12, ya que efectivamente por tratarse de un delito de Lesa Humanidad, respecto del cual la acción penal es imprescriptible no resulta posible sujetar la acción civil indemnizatoria a las normas sobre prescripción establecidas en el Código Civil.*

En efecto, como se dejó establecido en la parte penal de este fallo, en la especie, se cometió el delito de secuestro calificado en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Nacional, que tenían cargos de responsabilidad y en el ejercicio de su función pública, durante el mes de septiembre del año 1974, que tenía por misión central la ubicación, detención y desaparición de miembros del Partido Socialista, en que abusando de la autoridad y de que actuaban para recopilar antecedentes para acabar con dicha entidad política se ubicó, se detuvo y se trasladó a distintos recintos de detención clandestinos, desconocidos para la ciudadanía en esa época, en el caso concreto al cuartel de calle Londres 38 y Cuatro Álamos, que fueron acondicionados para mantener a la víctima en calidad de detenido, quien además fue interrogado bajo torturas, para delatar a otros integrantes del grupo político y en dicho lugar estuvieron hasta por lo menos el mes de agosto de 1974, época desde la que nunca más se supo de su paradero, razón por la cual el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal para la reparación de los perjuicios causados a la cónyuge e hijos de la víctima, y no solo está obligado en virtud del derecho internacional, sino que con ocasión de la dictación de las leyes 19.123 y 19.980, de los años 1992 y 2004 respectivamente, en que se establecen pensiones y beneficios a favor de quienes han sufrido por la violación de derechos humanos, normativa legal que contiene un reconocimiento expreso al deber del Estado de reparar los perjuicios patrimoniales sufridos a consecuencia de actos ilícitos, cualquiera sea el tiempo transcurrido, desde que dichos actos se cometieron.

Además, la acción indemnizatoria en análisis tiene su origen en la perpetración, como ya se dijo, de un delito de Lesa Humanidad, cometido por agentes del Estado, en que se persigue la responsabilidad pecuniaria de este último en virtud de la responsabilidad legal o extracontractual del Estado, establecida en la Constitución Política y normada en la responsabilidad estatal por actuaciones de sus agentes cuando se han violado los derechos humanos de los ciudadanos que viven en ese Estado. Y como delito de Lesa Humanidad, su persecución, como también se dijo, puede efectuarse en cualquier tiempo, por lo que la correspondiente acción civil debe estar ligada a esa característica, pues la persecución de responsabilidad no sólo contempla la penal, sino que también la civil, que es un aspecto que también debe ser satisfecho, asunto que por lo

demás, el Estado de Chile está plenamente consciente al dictar los cuerpos legales antes mencionados, en los que se refiere expresamente a que se debe instar por satisfacer los daños morales que han sufrido las personas por las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de las víctimas.

El Estado de Chile, por medio de esa normativa desplegó un conjunto de acciones y medidas tendientes a reparar los daños morales y materiales causados por graves violaciones a los derechos humanos acaecidos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, respecto de determinadas personas, lo que no significa restringir los beneficios a los indicados en ese cuerpo legal, desde que clara y expresamente queda fuera el pago de suma alguna, como reparación por concepto de daño moral, materia sobre la cual, cualquier persona, acreditando los requisitos exigidos por la ley, puede accionar contra el Estado.

Si bien en dicho cuerpo normativo (Ley 19.123) se habla de promover la reparación por concepto de daño moral, en definitiva, no se reguló forma alguna de compensación por dicho tópico, limitándose a establecer, que el Órgano que crea, inste por promover la reparación del daño moral, lo que implica un reconocimiento a la vigencia de la acción sobre dicha materia, atento que el Estado no puede legislar sobre una materia prescrita.

Sexagésimo segundo: *Que, el Fisco de Chile en cuanto al daño moral e indemnización reclamada, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente, lo que produce la imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. Sostiene que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, lo que no produce mayor dificultad en lo que se refiere al daño material o pecuniario. En lo tocante al daño puramente moral, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco compensa a la víctima en términos de ponerla en una situación equivalente a la que tenía antes de producirse el daño, motivo por el cual esta indemnización se cuantifica otorgándole*

una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño para hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero que sea compatible con esa finalidad meramente satisfactoria, sin que el monto que se fije pueda constituir una fuente de lucro o ganancia.

Asimismo, agrega el Fisco de Chile que en subsidio de las alegaciones de pago y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, así como tampoco procede el cobro de reajustes e intereses, toda vez que la para la demandada no tiene ninguna obligación de indemnizar.

Sexagésimo tercero: *Que, de acuerdo a lo que se viene razonando y decidiendo, por un lado se han desestimado las excepciones y defensas opuestas por el Fisco de Chile en cuanto a la procedencia y, por el otro, se han aceptado los requisitos de la acción incoada en contra del Fisco de Chile, por lo que corresponde determinar la existencia del daño causado a los actores civiles Norma Haydee Collantes Urbina, Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, y a fin de determinar su existencia, debe ser analizada la prueba rendida.*

Desde luego, con los certificados de nacimiento acompañados a foja 29 y 30, se encuentra debidamente acreditado que María Haydee Collantes Urbina y Joel Huaiquiñir Benavides son los padres de los demandantes Joel Antonio y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes; y con el certificado de matrimonio acompañado a foja 31, se encuentra demostrado que María Haydee Collantes Urbina y Joel Huaiquiñir Benavides celebraron matrimonio el 06 de abril de 1968 a las 10:10 horas en la Circunscripción de Ñuñoa. Además, es preciso consignar que se ha establecido el delito de secuestro calificado en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides por agentes del Estado, que se trata de un delito de Lesa Humanidad, ilícito que ha causado daños a los demandantes civiles, debiendo tener en cuenta, como se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema, que la normativa internacional aplicable a los delitos de lesa humanidad y sus consecuencias, propende a la reparación integral de las víctimas, lo que incluye el aspecto patrimonial.

Al respecto, es un hecho indesmentible que los hijos y cónyuge de la víctima han sufrido no sólo trastornos emocionales, síquicos y en su intimidad, por la sola circunstancia de no saber más de su ser querido, sin recibir ninguna explicación de la autoridad, sino que también

sufrieron directamente al propagarse noticias falsas acerca de que Huaiquiñir Benavides fue puesto en libertad y trasladado al sur del país, todo lo cual implica un sufrimiento espiritual y en su ser íntimo, que es necesario reparar.

Sexagésimo cuarto: *Que, los antecedentes antes reseñados y documentos oficiales, son de la entidad y gravedad suficiente para dejar por establecido que los demandantes civiles de autos, han sufrido dolor y aflicción permanente por el secuestro y desaparición de Joel Huaiquiñir Benavides, en sus calidades de hijos y cónyuge de un detenido desaparecido, respecto de lo cual también ha quedado acreditada con la documental pertinente, el parentesco que los ligaba con la víctima. Daño que se ha prolongado desde la detención de aquel, hasta hoy y que se prolongará por el resto de sus vidas, por lo que se ha acreditado suficientemente el daño moral que se reclama.*

Lo que ha sido corroborado con las testimoniales de foja 1251, en la que depone Coral Dalai Tamara Pey Grebe, quien afirma conocer a los demandantes Joel Antonio y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes y María Haydee Collantes Urbina y que en relación con la desaparición de su padre y cónyuge, respectivamente, Joel Huaiquiñir Benavides, se notaban muy afectadas emocionalmente, siendo evidente su estado depresivo, triste, sin nunca ver algo alegre en su familia, además de evidenciar su sufrimiento; y, testimonial de foja 1254, en la que depone Elena Megh Carvallo González, la que afirma conocer a los demandantes y que en relación con la desaparición de su padre y cónyuge, Joel Huaiquiñir Benavides, se notaban muy afectadas emocionalmente, siendo evidente su estado depresivo, tristeza familiar y repercusiones familiares.

Los indicados dichos no hacen más que fortalecer la conclusión del impacto emocional, síquico y espiritual que sufrieron y debieron soportar Joel Antonio Huaiquiñir Collantes, Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes y María Haydee Collantes Urbina, daño que debe ser reparado.

Sexagésimo quinto: *Que, de este modo se ha establecido la concurrencia de todos los presupuestos que hacen procedente la demanda civil de perjuicios, esto es, la comisión de un delito por Agentes del Estado, la existencia de un daño sufrido por los actores civiles y la existencia del nexo causal entre éste y aquellos. Todo lo dicho y lo reflexionado en los motivos anteriores, forman la convicción que los*

demandantes han sufrido un menoscabo psíquico y moral, que se extiende hasta hoy, por no saber del destino final de su padre y cónyuge, más aún cuando han debido soportar un largo periodo de incertidumbre acerca de su paradero real y efectivo, lo que implica necesariamente un dolor inconmensurable que no puede ser superado por suma alguna.

No obstante ello, con la finalidad de morigerar en algo tal dolor y por haberse preocupado, realizando gestiones para conocer el paradero de la víctima, y con el propósito de suplir algunas necesidades materiales que todo este prolongado peregrinar les ha causado, se fija el daño moral sufrido por los actores, en la suma de ciento treinta millones de pesos (\$130.000.000.-) para la demandante María Haydee Collantes Urbina y cien millones de pesos (\$100.000.000.-) para cada uno de los hijos Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes.

Las cifras antes indicadas serán pagadas por el Fisco reajustada de acuerdo al aumento que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de dictación del presente fallo y el mes anterior al de su pago, devengando dicha suma intereses corrientes para operaciones reajustables, por el mismo periodo.

Rechazándose de esta forma la pretensión del Fisco de Chile de que los reajustes e intereses se calculen desde que la sentencia que se dicte se encuentre firme o ejecutoriada, ya que el mecanismo de actualización económica y mantención de poder adquisitivo debe acompañar a la obligación desde su reconocimiento, lo que sucede con la dictación del fallo.

Y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 15 N° 1 y 3, 24, 28, 50, 68, 74 y 141 del Código Penal; artículos 10, 40, 108, 109, 110, 125, 434, 456 bis, 459, 460, 464, 473, 481, 482, 488, 500, 501, 502, 503, 504 y 533 del Código de Procedimiento Penal, artículo 2314 del Código Civil y artículos 5 y 38 de la Constitución Política de la República, se decide:

A.- En cuanto a la acción penal.

I. Que se absuelve a César Manríquez Bravo y a Orlando José Manzo Durán de la acusación judicial deducida en su contra en la pieza de cargos de foja 984 a 988 y adhesiones de foja 993, 996 y 1000, como autores del delito de secuestro calificado de Joel Huaiquiñir Benavides.

II. Que se condena a Miguel Krassnoff Martchenko y a Basclay Humberto Zapata Reyes, ya individualizados, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, para cada uno de ellos, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro calificado en la persona de Joel Huaiquiñir Benavides, hecho ocurrido en esta ciudad el día 27 de julio de 1974.

II. Que en atención a la extensión de la pena impuesta y no concurriendo en la especie los requisitos legales, no se concede a los sentenciados ninguno de los beneficios alternativos de la Ley 18.216, por tanto deberán cumplir efectivamente la pena corporal impuesta.

III. Que las indicadas sanciones se empezarán a contar una vez que se cumplan las condenas que actualmente están sirviendo los sentenciados y, una vez que ellos se presenten o sean habidos, contándose la pena en el caso de Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes desde el 15 de mayo de 2015, fecha desde la cual permanecen ininterrumpidamente privados de libertad, según consta del certificado de foja 1477. Todo lo anterior, sin perjuicio, del cómputo final que se haga en la última condena que se dicte contra los indicados sentenciados.

Una vez ejecutoriado el fallo, previo a entrar a cumplir la presente sentencia, practíqueseles un nuevo examen de facultades mentales a todos los sentenciados, para los efectos del artículo 687 del Código de Procedimiento Penal

IV. Atendido lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5 y 17 de la Ley 19.970 determínese e incorpórese huella genética de los sentenciados condenados, previa toma de muestras biológicas, si fuere necesario.

B.- En cuanto a la acción civil.

Que se acogen las demandas civiles de indemnización de perjuicios deducida por los abogados Boris Paredes Bustos y Magdalena Garcés Fuentes mediante presentación de foja 1000 por los querellantes María Haydee Collantes Urbina, Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Huaiquiñir Collantes, y se declara que se condena al Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado a pagar por concepto de daño moral a los demandantes, la suma de ciento

treinta millones de pesos (\$130.000.000.-) para la demandante María Haydee Collantes Urbina y la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000.-) para cada uno de los actores Joel Antonio Huaiquiñir Collantes y Vladimir Ernesto Hauiquiñir Collantes, más los reajustes e intereses calculados en la forma indicada en el presente fallo.

Dese oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Agréguese certificación del presente fallo a las causas en las que son procesados los condenados que se tramitan ante este ministro y/o aparecen en su extracto de filiación, para los efectos del artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese a todas las partes del juicio y consúltese, si no se apelar.

Encontrándose Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez Bravo, Orlando José Manzo Durán y Basclay Humberto Zapata Reyes reclusos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco de Gendarmería de Chile, constitúyase en dicho lugar el Sr. Secretario a fin de notificar personalmente el presente fallo y respecto de los apoderados y demás intervinientes, practíquense las notificaciones por el receptor de turno en lo criminal.

ROL N° 47.518 Joel Huaiquiñir Benavides

Dictada por don Miguel Eduardo Vázquez Plaza, Ministro de Fuero de la I. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.